

Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Derecho



La función administrativa y los Colegios Profesionales: Análisis de las modalidades de colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú, en mérito de lo desarrollado en la Resolución N°0549-2019/SEL-INDECOPI

Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de Abogado

Autor

Raúl Eduardo Enrique Valverde

Revisor

Laura Isabel Francia Acuña

Lima, 2021

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de la Resolución N° 0549-2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ampliamente discutido a nivel jurisprudencial y doctrinario como es la definición de la naturaleza jurídica de los colegios profesionales y su ejercicio, en determinados ámbitos, de función administrativa. En ese sentido, se analizarán las funciones que posee el Colegio de Ingenieros del Perú, además de la revisión de sus principales instrumentos de gestión y normativos, como lo son su Estatuto y Reglamento de Colegiación 2018. Siendo así, por un lado, se corroborará que este colegiado ejerce función administrativa al otorgarles la colegiatura a los profesionales ingenieros del país. Por otro lado, del examen de los instrumentos de gestión referidos de esta entidad, se evidenciará una restricción en la modalidad de colegiatura ordinaria que no obedece a una circunstancia objetiva, pues solo responde a la nacionalidad del aspirante, lo que constituye una medida discriminatoria y, por ende, ilegal, ya que vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como los principios de uniformidad e imparcialidad y el artículo 66 previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ÍNDICE DE CONTENIDO

I.	Introducción.....	4
II.	Justificación de elección de la resolución.....	5
III.	Hechos relevantes.....	5
IV.	Problemas jurídicos.....	12
V.	Capítulo I: ¿El Colegio de Ingenieros del Perú ejerce función administrativa cuando concede la colegiatura a los profesionales ingenieros?.....	12
	5.1.¿Qué es la función administrativa y quiénes la ejercen?.....	12
	5.2.¿Cuál es la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales?.....	15
	5.3. Los colegios profesionales como personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función administrativa.....	19
	5.4. Resoluciones de INDECOPI en materia de barreras burocráticas sobre colegios profesionales.....	23
	5.5.Las funciones del Colegio de Ingenieros del Perú.....	26
	5.6.Determinar si el Colegio de Ingenieros del Perú ejerce función administrativa cuando otorga la colegiatura a los profesionales de ingeniería.....	27
VI.	Capítulo II: ¿El Colegio de Ingenieros del Perú estableció medidas discriminatorias para la obtención de la colegiatura ordinaria entre los profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros? 28	
	6.1.¿Qué es la discriminación?.....	29
	6.2.Distinción entre discriminación y trato diferenciado justificado.....	32
	6.3.Modalidades de colegiaturas reguladas en el Estatuto del Colegio de Ingeniero del Perú del año 2018.....	34
	6.4.Requisitos para acceder a la colegiatura, según lo establecido en el Reglamento de Colegiación 2018.....	35
	6.5.Determinar si el Colegio de Ingenieros del Perú estableció medidas discriminatorias para la obtención de la colegiatura ordinaria entre los profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros.....	36
VII.	Conclusiones.....	39
VIII.	Bibliografía.....	41

INTRODUCCIÓN

El presente informe desarrollará el análisis de la Resolución N° 0549-2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ampliamente discutido a nivel jurisprudencial y doctrinario como es la definición de la naturaleza jurídica de los colegios profesionales y su ejercicio, en determinados ámbitos, de función administrativa. Asimismo, evidencia medidas discriminatorias por motivos de nacionalidad, aún presentes en nuestro país, establecidas por parte de determinados colegios profesionales.

Siendo así, analizaremos, por un lado, si el Colegio de Ingenieros del Perú realiza función administrativa al momento de otorgar la colegiatura a los profesionales ingenieros en nuestro país. Para ello, explicaremos qué es lo que se entiende por “función administrativa” y quiénes, según nuestra normativa interna, pueden ejercerla. De forma posterior, desarrollaremos la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, a través de un análisis de nuestro texto constitucional, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pronunciamientos anteriores de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI y la doctrina jurídica al respecto; para culminar con la revisión de las funciones establecidas en los propios instrumentos normativos del Colegio de Ingenieros.

Por otro lado, determinaremos si, efectivamente, el Colegio de Ingenieros estableció medidas discriminatorias, respecto a la obtención de la colegiatura ordinaria entre los profesionales en ingeniería peruanos y extranjeros, en la regulación de su Estatuto y Reglamento de Colegiación, ambos del año 2018. Al respecto, explicaremos cuándo estamos ante un supuesto de trato diferenciado justificado y cuándo ante uno de discriminación, para luego revisar y analizar las modalidades de colegiatura existentes y los requisitos para su obtención, previstos en los instrumentos normativos anteriormente referidos.

Finalmente, definiremos nuestras conclusiones, basadas en el desarrollo y examen de cada capítulo.

JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Son dos los motivos principales que sustentan mi elección de la Resolución N° 0549-2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, los cuales se detallan a continuación detallo:

- El poder formar una postura respecto al debate sobre la naturaleza jurídica de los colegios profesionales y su ejercicio, en determinados ámbitos, de la función administrativa, teniendo en consideración lo dispuesto en nuestra normativa, jurisprudencia constitucional, resoluciones administrativas anteriores emitidas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI y doctrina al respecto.
- Poner en evidencia un problema arcaico, pero aún presente en nuestro país, como es la discriminación por motivos de nacionalidad, camuflada, en el presente caso, en el Estatuto y Reglamento de Colegiación de un colegio profesional, cuyas consecuencias pueden impedir el ejercicio de una profesión.

HECHOS RELEVANTES

1. Con fecha 11 de septiembre de 2018, el señor Borja López Lasala (en adelante, “el denunciante”) interpuso una denuncia contra el Colegio de Ingenieros del Perú (en adelante, el “CIP”) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “la Comisión”), por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en lo siguiente:
 - i. El tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

- ii. La exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

2. El denunciante sustenta su denuncia en base a los siguientes argumentos:

Respecto de la restricción de obtener la colegiatura ordinaria para los profesionales en ingeniería extranjeros

- Según lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del CIP, la única opción que tienen los profesionales ingenieros extranjeros para obtener una colegiatura ordinaria es que estén registrados en un colegio profesional extranjero con el cual tengan un convenio específico.

Respecto de la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros sean presentados por tres miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

- Contraviene lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo 34 del Reglamento del CIP, toda vez que estos últimos ya acreditan la capacidad profesional del solicitante.
 - Tal medida impide el ejercicio de la profesión al solicitante que no reconozca o encuentre a los profesionales ingenieros con los criterios exigidos, pese a contar con un permiso de trabajo.
 - No se ha justificado la medida. Su imposición lo obliga a depender de terceras personas para poder obtener una colegiatura temporal.
3. Mediante Resolución 0510-2018/CEB-INDECOPI del 19 de octubre de 2018, la Comisión admitió a trámite la denuncia por las medidas indicadas en el numeral 1.
 4. El 14 de noviembre de 2018, el CIP presentó sus descargos.
 5. Mediante Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, la Comisión determinó declarar barrera burocrática ilegal lo señalado en el punto 1.

i) y barrera burocrática carente de razonabilidad lo señalado en el punto 1. ii), señalando lo siguiente:

Respecto de la restricción de obtener la colegiatura ordinaria para los profesionales en ingeniería extranjeros

- El CIP no ha justificado ni acreditado las razones por las que se hace una distinción entre el tratamiento brindado a los profesionales en ingeniería extranjeros respecto de los profesionales peruanos, para obtener una colegiatura ordinaria.

Respecto de la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros sean presentados por tres miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

- La exigencia es legal, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 24648; no obstante, el CIP no ha presentado información que permita demostrar la razonabilidad de esta medida.

6. Con fecha 27 de marzo de 2019, el CIP interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, señalando lo siguiente:

Respecto de la restricción de obtener la colegiatura ordinaria para los profesionales en ingeniería extranjeros

- La Comisión no ha considerado que la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas se pronunció en un procedimiento anterior (Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI) declarando que el Estatuto y el Reglamento de Incorporación no contienen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, siendo que en ambos casos la medida cuestionada trata sobre la misma figura: la colegiación ordinaria. En ese sentido, la Comisión no ha justificado por qué no se alineó al criterio de la Sala.
- No se ha hecho un estudio completo del literal a) del numeral 3.03 del Estatuto del CIP, referido a los ingenieros ordinarios, el cual señala que también podrán incorporarse en esta modalidad aquellos profesionales registrados en los colegios profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento, además de que el Reglamento de

Colegiación brinda tres alternativas para incorporarse como colegiado ordinario.

Respecto de la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros sean presentados por tres miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

- La Comisión no ha considerado que la medida ya se encontraba prevista en un reglamento anterior, el cual fue evaluado en la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI y no se formuló ninguna observación al respecto.
- Es conocida la abundancia de documentos falsificados, por lo cual se pide que la presentación esté a cargo de profesionales peruanos.

Pedido de confidencialidad de documentos

- No resulta necesaria la publicidad del debate para la aprobación de los Estatutos ni las opiniones del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del CIP.
7. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “la Sala”), plantea las siguientes cuestiones en discusión:
- i. Evaluar si corresponde declarar la confidencialidad solicitada por el CIP.
 - ii. Determinar si las medidas señaladas en el numeral 1 constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.
8. Mediante Resolución 0549-2019/SEL-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2019, la Sala se pronuncia respecto a los puntos en discusión anteriormente señalados, desarrollando lo siguiente:

Respecto al pedido de confidencialidad del CIP

- El numeral 2.1. de la Directiva 001-2008-TRI-INDECOPI, Directiva sobre confidencialidad de la información en los procedimientos seguidos por los órganos funcionales del INDECOPI, establece que se considerará confidencial la información presentada por las partes o terceros cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero del que el aportante

la hubiera recibido, u otorgue una ventaja significativa para un competidor del aportante de la información.

- El CIP no ha explicado cuál sería la afectación significativa que se produciría en el supuesto de que la información contenida en las actas de sesiones del Congreso Nacional de Consejos Departamentales sea accesible junto con el expediente público, motivo por el que la Sala confirma lo señalado por la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en el extremo que denegó el pedido de confidencialidad formulado por el CIP.

Marco normativo de la actividad que ejerce el CIP

De forma previa a realizar el análisis respecto a las medidas establecidas declaradas barreras burocráticas por la Comisión, la Sala desarrolla apropiadamente el marco normativo de la actividad que ejerce el CIP, determinando lo siguiente:

- El artículo 20 de la Constitución Política define la naturaleza jurídica de los colegios profesionales al señalar que son instituciones autónomas con personalidad de derecho público.
- Mediante Ley N°24648, Ley del CIP, se creó dicha entidad como una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el Perú. En la referida ley se estableció, asimismo, la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el Perú. Ello ha sido ratificado por el artículo 1 de la Ley N°28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al CIP para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República.
- En virtud de su autonomía constitucional, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N°24648, es el propio CIP el que regula el procedimiento para obtener la incorporación de miembros a su orden, así como los requisitos y condiciones requeridos para ello. En ese sentido, dada la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional de la ingeniería en el país, el CIP en tanto entidad de la Administración Pública que ejerce función administrativa, deberá respetar las disposiciones que rigen a estas, en observancia del principio de legalidad y, en consecuencia, de las normas del ordenamiento jurídico vigente,

especialmente de las reglas contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, “TUO de la LPAG”).

Análisis de legalidad respecto de la restricción de obtener la colegiatura ordinaria para los profesionales en ingeniería extranjeros

- No existe un apartamiento de la Comisión del criterio expuesto en la Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI, puesto que en el referido acto administrativo se analizó una controversia distinta a la presente.
- El CIP ha establecido una restricción para la obtención de la colegiatura ordinaria que no obedece a una circunstancia objetiva, sino que responde únicamente a la nacionalidad del aspirante.
- Coincide con lo expresado por la Comisión y concluye que la restricción impuesta por el CIP constituye una medida discriminatoria y, en consecuencia, ilegal, pues vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, así como los principios de uniformidad e imparcialidad y el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Análisis de legalidad y razonabilidad respecto de la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros sean presentados por tres miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

- El artículo 6 de la Ley 24648 le otorga al CIP plenas facultades para emitir normas que regulan el procedimiento de colegiación, incluyendo los reglamentos correspondientes, por lo que la exigencia es legal; consiguientemente, siendo que el denunciante ha aportado indicios suficientes respecto a la arbitrariedad de esta medida, corresponderá efectuar el análisis de razonabilidad.
- Respecto a este análisis, ninguno de los argumentos del CIP ha contemplado algún interés público que se busque tutelar a través de la exigencia cuestionada, tampoco ha realizado una evaluación del impacto de la medida (que no es arbitraria; que sea proporcional) en los agentes económicos obligados a cumplirla.
- La suficiencia técnica del aspirante a obtener la colegiatura temporal queda demostrada con la obtención del grado o título reconocido por la SUNEDU.

- La medida genera consecuencias negativas, pues crea incentivos para que los profesionales en ingeniería extranjeros busquen obtener este tipo de recomendaciones a cualquier costo, el cual siempre resultará menor frente a la imposibilidad de ejercer su profesión. Se podría crear un “mercado de recomendaciones”.
9. Por los motivos expuestos, la Sala confirmó la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en los extremos que declararon barrera burocrática ilegal lo señalado en el punto 1. I), además de su inaplicación con efectos generales y la publicación de un extracto de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; y, barrera burocrática carente de razonabilidad lo señalado en el punto 1. ii).



CAPÍTULO I: ¿El Colegio de Ingenieros del Perú ejerce función administrativa cuando concede la colegiatura a los profesionales ingenieros?

En el desarrollo del presente capítulo, se analizará cuál es la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, para luego determinar si ejercen, en determinados ámbitos, función administrativa. Este examen se centrará en la facultad que posee el CIP para otorgar la colegiatura a los profesionales ingenieros. Para ello, de forma previa, se estudiará y explicará el concepto de “función administrativa”, en base a lo dispuesto por la doctrina y legislación nacional.

¿Qué es la función administrativa y quiénes la ejercen?

No existe una definición uniforme en la doctrina jurídica cuando se trata de conceptualizar el término de “función administrativa”. No obstante, para partir de una idea central, resulta necesario reconocer, por un lado, qué se entiende por “Administración Pública”. Según Abruña Puyol (2010), la Administración Pública es una organización que participa del poder público en su sentido jurídico, es decir, posee capacidad de crear, modificar o extinguir unilateralmente derechos y obligaciones y tiene, además, la posibilidad de imponerlos, cuando fuera necesario, coactivamente. Ello se manifiesta en las denominadas “potestades públicas” (p.70).

Por otro lado, debemos remitirnos y traer a colación, la vetusta división del ejercicio del poder público en tres funciones principales del Estado: la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Y es que, sin ingresar en la descripción e instituciones que la ejercen, respectivamente, en sus diferencias prácticas conocidas, se ha enmarcado una función transversal a todas. Esta es la denominada “función administrativa”. En palabras de Martín (2011), esta función se encarga, precisamente, “de la administración o gestión de los medios materiales y la acción estatal dirigida a la consecución de los intereses públicos” (p.104). Cabe precisar, sin embargo, que esta definición no es limitativa, sino, más bien, referencial.

Por su parte, Guzmán, en lugar de una concreta definición, establece algunos rasgos característicos de la “función administrativa”, señalando que esta, si bien es función pública, no es privativa del Estado, es decir, podrán ejercerla los particulares mediante respectiva autorización, disgregando, así, su relación conceptual con el de Administración Pública; afectan de manera directa a los administrados; se encuentra sometida al principio

de legalidad y, en especial, a la ley establecida por el Parlamento; y, finalmente, está sometida a diversos mecanismos de control (Guzmán, 2008, p.291).

Dromi (2009), en tanto, precisa a la “función administrativa” como el “conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con prescindencia del órgano o agente que la realice y que se traduce en una ejecución concreta y práctica” (p.106). Relacionado a este concepto, Morón (2020) construye una definición de “función administrativa”, direccionada al cumplimiento de determinados fines de interés general:

“Es el conjunto de decisiones y operaciones mediante los cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por las políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos” (p.33).

De estos variados esfuerzos por delimitar el concepto de “función administrativa”, podemos inferir, como rasgo esencial, que se tratan de acciones materiales enfocadas a la satisfacción de los intereses públicos.

Dicho ello, resulta importante señalar que nuestra legislación nacional no ha establecido o recogido alguna definición de “función administrativa” ni de “Administración Pública”; sin embargo, ha detallado su ámbito aplicativo y cuáles son las entidades que conforman la Administración (criterio orgánico). Ello ha sido plasmado en el TUO de la LPAG, cuya finalidad no ha sido otra que “establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general”, y, que en su artículo I del Título Preliminar dispone expresamente lo siguiente:

“Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada”.

El supuesto más llamativo de esta lista es, sin duda, la inclusión de las personas jurídicas, que se rigen bajo el régimen privado, que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, como entidades de la Administración Pública. Así, el mismo texto precisa que los procedimientos de estas entidades se determinarán por la referida Ley, únicamente en lo que le fuera aplicable, de acuerdo a su naturaleza particular. Es decir, habrá aspectos de esta Ley que le sean aplicables, y otros que no.

Cabe recalcar, que la función administrativa no es privativa de los estamentos estatales, por lo que puede ejercerse, también, en entes privados, como los que precisa la Ley, a través de la concesión, delegación de atribuciones y otros (Morón, 2020, p.42). Al respecto, para efectos del presente informe, describiremos, de forma breve, qué se entiende por delegación de función administrativa.

Según Martin (2012), en este supuesto, lo que se delega, bajo ciertas reglas, es la competencia de la autoridad administrativa a una entidad que, temporalmente, será competente para ejercer la función administrativa delegada. Asimismo, agrega, que esta

sería una técnica válida para considerar a una persona jurídica bajo el régimen privado como entidad de la Administración Pública (p.104).

En ese sentido, en el presente trabajo, nos centraremos en el estudio de las personas jurídicas que ejercen función administrativa, específicamente en el caso de los colegios profesionales.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los colegios profesionales?

Para encaminarnos a dilucidar la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, resulta necesario remitirnos a lo establecido en nuestra Constitución Política. Así, el artículo 20 de nuestra Carta Magna refiere expresamente lo siguiente:

“Artículo 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”.

Es, entonces, la propia Constitución quien reconoce en los colegios profesionales una personalidad jurídica de derecho público. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 6 de la sentencia recaída en el expediente N°3954-2006-PA/TC, señala que el referido artículo 20 no solo define la naturaleza jurídica de los colegios profesionales, y establece su creación por ley, sino que, además, les otorga autonomía, pudiendo desenvolverse en un ámbito propio de actuación y decisión. Agrega, en esa línea, que esta independencia se refleja en una autonomía administrativa, para establecer su organización interna; económica, para determinar sus ingresos propios, así como su destino; y, una normativa, para elaborar y aprobar sus propios estatutos, dentro del marco constitucional y legal establecido.

Asimismo, señala que la constitucionalización de los colegios profesionales reside en incorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional. Y que la finalidad esencial de estas entidades es la tutela de intereses públicos, vinculada, justamente, al control del ejercicio profesional de sus miembros. Estos rasgos de la sentencia denotan una naturaleza administrativa, también, de los colegios profesionales, pues poseen entre sus prioridades la satisfacción de intereses generales.

Sobre ello, Pomed (2010) menciona que el Estado, criteriosamente, opta por la creación de estas entidades corporativas con la finalidad de que le faciliten el cumplimiento de la

función estatal de supervisión de la práctica de profesionales (p.384). Ello, como ya fue comentado en líneas anteriores, se relaciona estrechamente con la delegación de atribuciones del Estado en el ejercicio de la función administrativa. Se evidencia, así, una ambivalencia de la actividad que ejercen los colegios profesionales, ya que, además de velar por la defensa de sus propios miembros y fines particulares, se les encomienda facultades y competencias públicas para desarrollarlas a la par del Estado, sometidas al Derecho administrativo (Ariño, 1973, p.45).

En ese mismo sentido, López González (2001), respecto a la naturaleza de los colegios profesionales, refiere lo siguiente:

“Los Colegios Profesionales constituyen corporaciones sectoriales de carácter profesional que, junto a determinados cometidos de naturaleza privada, desempeñan funciones públicas de enorme trascendencia en relación a la ordenación y control del correcto desempeño de la profesión de que se trate. Estas tareas son asumidas en otros ámbitos directamente por la Administración, en tanto que en el marco de las profesiones tituladas el Estado encomienda a los entes colegiales la representación de los intereses de la profesión y la ordenación de su ejercicio con arreglo a Derecho” (p.21).

Ahora, es sustancial empezar con el análisis de esta sentencia, pues nos introduce en la materialización de la función administrativa de los colegios profesionales, que, en dicho contexto, se concretó en el reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional del ejercicio de la potestad sancionadora del Colegio de Abogados de Lima sobre sus miembros. En efecto, en el fundamento 9 de la sentencia de análisis, el máximo intérprete de la Constitución refirió lo siguiente:

“Así, en su rol de ente fiscalizador, tiene la función de establecer, desde un punto de vista deontológico o ético, los parámetros del ejercicio profesional de sus agremiados, con la posibilidad de instaurar los procesos disciplinarios correspondientes a quienes incurran en inconducta profesional o cometan actos contrarios a la ética profesional y a los principios y fines que como institución

persigue, contando con la atribución de imponer las sanciones a quienes resulten responsables”.

Como se observa, la autonomía constitucional reconocida a los colegios profesionales los faculta para que, entre otras funciones, pueden establecer medidas disciplinarias a sus miembros, establecidas en los instrumentos normativos respectivos. En la referida sentencia, la sanción de suspensión por un año en el ejercicio de la profesión contra un miembro del Colegio de Abogados de Lima, se debió al incumplimiento de las normas reguladas en el Estatuto del Colegio de Abogados señalado y en el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú.

Ariño Ortiz (1973), en relación a ello, señalaba lo siguiente:

“Las funciones o competencias estatales ejercidas por estos entes (poderes disciplinarios, policía sobre la actividad, poder certificante y pericial, potestad sancionadora del intrusismo, etc.) suponen, por tanto, la producción de verdaderos actos administrativos no porque los Colegios o las Cámaras formen parte de la organización estatal ni sean subjetivamente Administración pública, sino porque en esos momentos ejercitan competencias y el Derecho administrativo les es plenamente aplicable” (p.48).

Existen, entonces, determinados ámbitos en los que los colegios profesionales, ejercen función administrativa, como en el caso, al momento en que imponen medidas disciplinarias a sus integrantes, por la vulneración a algunos de sus instrumentos normativos.

Visto ello, continuemos con la revisión de lo señalado en el artículo 20 de la Constitución, en la parte que refiere que la “ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”. Desde una primera lectura, podríamos deducir que para ejercer determinada profesión no necesariamente en todas las carreras la colegiatura será obligatoria. Sin embargo, resulta de trascendencia conocer cuándo sí lo será, tarea encomendada al legislador, pues tal atributo está ligado directamente con el ejercicio de la profesión estudiada a desempeñar. Sobre ello, nuestro Tribunal Constitucional se ha manifestado mediante la sentencia recaída en el expediente N°0027-2005-PI/TC, señalando en su fundamento 5 lo siguiente:

“Adicionalmente a la definición de los colegios profesionales como instituciones autónomas de Derecho Público, nuestra Constitución hace referencia también a la colegiación. Si bien este tópico se analizará más adelante, cabe adelantar algunas ideas al respecto. Como se deriva del propio texto constitucional, nuestra Ley Fundamental ha delegado en el legislador la potestad para determinar aquellos supuestos en los cuales la colegiación será obligatoria. Esto supone, para el legislador, una grave responsabilidad, pues la colegiación –ya sea obligatoria o facultativa– tiene una vinculación muy estrecha con el ejercicio profesional” (subrayado nuestro).

Así, resulta principal no solo el desarrollo legislativo optativo respecto a la colegiación obligatoria para el ejercicio de determinada profesión, sino también todos los procedimientos o mecanismos que se establezcan para su obtención, pues, caso contrario, se podría dificultar tal proceso y, por ende, se negaría el libre ejercicio de la profesión. Como ya hemos comentado en los ejemplos citados, debido a la autonomía normativa que poseen, normalmente, este procedimiento es llevado a cabo por los propios colegios profesionales.

Ha quedado claro, entonces, que los colegios profesionales poseen una naturaleza jurídica constitucional que los reconoce como instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Así también, se ha desarrollado que mantienen una ambivalencia de la actividad que ejercen, ya que, además de velar por la defensa de sus propios miembros y fines particulares, se les encomienda facultades y competencias públicas para desarrollarlas a la par del Estado. Por último, la legislación nacional ha incluido en el artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a estas entidades como parte de la Administración Pública. Sin embargo, sobre este último punto, con la finalidad de precisar lo referido sutilmente en el desarrollo del primer punto del presente informe, resulta importante que establezcamos en qué numeral del artículo I del TUO de la LPAG se encuentran regulados los colegios profesionales.

Los Colegios Profesionales como personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función administrativa

A estas alturas del informe, no cabe duda, según lo desarrollado en la doctrina y jurisprudencia, que los colegios profesionales ejercen, en determinados ámbitos, función administrativa y que han sido incluidos en el artículo I del TUO de la LPAG, como parte de las “entidades” de la Administración Pública. No obstante, lo que aún no es del todo evidente es en qué numeral del referido artículo se encuentra inmersos. Esta disyuntiva doctrinal y jurisprudencial, en nuestro país, fue puesta en demostración por el Tribunal Constitucional al señalar en la sentencia recaída en el expediente N°05691-2008-PA/TC, lo siguiente:

“Que como ya lo ha advertido este Supremo Tribunal en la sentencia antes nombrada, el artículo 20 de la Constitución confiere a los Colegios Profesionales la categoría de instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Por otro lado, el numeral 6 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General, considera como ‘entidades’ de la administración pública a ‘[L]os Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes le confieren autonomía’. En consecuencia, el procedimiento administrativo disciplinario desarrollado en el seno del Tribunal demandado, como órgano de un Colegio Profesional, autónomo por mandato constitucional, se rige supletoriamente por las disposiciones de la citada ley (...)” (subrayado nuestro).

Por su parte, el numeral 6 del artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG, refiere expresamente lo siguiente:

“Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

(...)

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.

(...)”.

Como se desprende del fundamento citado, para nuestro Tribunal Constitucional los colegios profesionales son organismos autónomos. Ello guarda relación con lo establecido en el fundamento 6 de la sentencia recaída en el expediente N°3954-2006-PA/TC, el cual desarrolla la autonomía administrativa, económica y normativa reconocida a estas entidades por el artículo 20 de la Constitución Política.

Al respecto, en el mismo caso del Colegio de Abogados de Lima, Morón (2020) refiere que una doctrina consolidada ha señalado que las investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias impuestas por los colegios profesionales deben cumplir los estándares que esta norma contiene para la potestad sancionadora administrativa, porque son instituciones de Derecho Público interno, autónomo e independiente que agremia a los abogados en el ejercicio profesional, cuyos fines se alinean a promover y cautelar el ejercicio profesional con honor y responsabilidad social (p.44). En ese sentido, cuando los colegios profesionales actúan con tales facultades, se encuentran inmersos en lo previsto por el numeral 6 del artículo I del TUO de la LPAG.

En ese mismo sentido, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante resoluciones N°0116-2018/SEL-INDECOPI y N°0117-2018/SEL-INDECOPI ha incluido a los colegios profesionales en el numeral 6 del artículo I del TUO de la LPAG, es decir, como un organismo al que la Constitución Política y las leyes confieren autonomía.

Pero, ¿qué se entiende por organismos autónomos? Para el profesor Rubio (2009), los organismos constitucionalmente autónomos son aquellos que cuentan con autonomía formal de los órganos del gobierno central. Esta autonomía se relaciona con la toma de decisiones en los ámbitos de su competencia sin someterse a órdenes superiores de ningún tipo (p.31). Por su parte, Morón (2020) señala que estos organismos son instituciones creadas por el constituyente de manera permanente sin adscribirlos a ningún otro organismo del Estado y a los cuales se les ha asignado competencias esencialmente diferenciadas de las demás, por considerarse fundamental dentro del esquema constitucional de derecho (p.42). Ejemplo de estas entidades son el Tribunal

Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de la Reserva, entre otros.

Entonces, los organismos constitucionalmente autónomos poseen una marcada función pública, lo que no podría asemejarse uniformemente a la naturaleza de los colegios profesionales, pues, como ya se explicó, estos además de tener asignadas potestades administrativas, también realizan actividades jurídicas privadas, por lo que mantienen una probada naturaleza jurídico mixta.

Siendo así, no podrían estar inmersos en el numeral 6 del artículo I del TUO de la LPAG, sino, más bien, en el numeral 8 de la referida ley. Este señala lo siguiente:

“Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

(...)

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

(...)”.

La naturaleza jurídico compuesta de los colegios profesionales constituyen determinadas características especiales, que la diferencian, notoriamente, de los organismos autónomos. Al respecto, Santamaría Pastor (2002), detalla, de forma concisa, algunos rasgos de los colegios que identifican su particularidad:

- a) Son creados, regulados o reconocidos por normas estatales;
- b) en ocasiones, la pertenencia de los administrados a tales entidades es obligatoria;
- c) dichas normas les confían, junto a actividades de puro interés particular de sus miembros, algunas funciones de regulación, disciplina y/o fomento de la actividad de los asociados que, o son típicamente públicas (como la potestad normativa o

sancionadora) o corresponden a tareas que, respecto a otros colectivos de personas, son asumidas directamente por la Administración;

- d) a la encomienda de dichas funciones públicas corresponde el que determinados actos de estas entidades sean susceptibles de ser recurridos ante la propia Administración (y/o, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso administrativo);
- e) en algún caso, se les adscriben los rendimientos de algún tributo o figura semejante para sostener el funcionamiento de la entidad; y,
- f) muchas de estas entidades son calificadas, por sus normas creadoras, como Corporaciones de Derecho Público (p. 342-344).

De igual forma, para Cosculluela Montaner (2003), la Administración Corporativa de base privada, refiriéndose a los colegios profesionales, representa históricamente una opción política de organización social, que implica el “reconocimiento de la capacidad de ciertos sectores sociales para autoorganizarse y representar sus intereses ante los poderes públicos y desempeñar las funciones públicas de ordenación del sector más directamente vinculadas a la actividad que les es propia” (p. 238). Estas características expresan una composición privada, sin relegar, por supuesto, las funciones administrativas competentes atribuidas por el Estado.

Por tal motivo, podemos concluir sobre este apartado que los colegios profesionales son personas jurídicas que poseen una naturaleza ambivalente o compuesta que, en determinados ámbitos, ejercen función administrativa, y, en otros, velan por sus propios fines y los de sus agremiados, por lo que resulta apropiado que se enmarquen dentro de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo I del TUO de la LPAG.

Despejada esta cuestión, antes de enfocarnos en si, efectivamente, el Colegio de Ingenieros del Perú ejerce función administrativa cuando otorga la colegiatura a los profesionales ingenieros, repasemos brevemente, a modo de antecedentes, algunas resoluciones tanto de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas como de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas respecto a los colegios profesionales.

Resoluciones del INDECOPI en materia de barreras burocráticas sobre colegios profesionales

Resolución 0079-2017/CEB-INDECOPI

Mediante esta resolución, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas confirmó el criterio de que, para analizar si un colegio profesional, a través de algunas de sus actuaciones, ejerce función administrativa se debe atender necesariamente a la naturaleza de las funciones que realiza, es decir, se debe evaluar si sus decisiones tienen carácter de obligatoriedad, en la medida que representan una manifestación del ius imperium estatal. En el caso, la Comisión se remite lo establecido en el artículo 284 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala que, para que un profesional de Derecho ejerza su profesión a través del patrocinio de casos, es decir, represente a un cliente en un juicio, por ejemplo, debe estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente, lo cual ha sido reconocido también en los Estatutos del propio colegio profesional. Siendo así, la Comisión advierte esto como una delegación legal, en favor del Colegio de Abogados de Lima, para incorporar a su gremio a los profesionales en Derecho que deseen ejercer la profesión de abogado, siendo esta incorporación el único medio por el cual se les puede conceder una habilitación para ejercer su profesión ante el Poder Judicial. En ese sentido, la Comisión determinó que, el Colegio de Abogados de Lima, en esta práctica, ejerce función administrativa.

Resolución 0116-2018/SEL-INDECOPI

En el mismo sentido que el caso anterior, mediante esta Resolución, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, confirmando lo señalado mediante Resolución N°0079-2017/CEB-INDECOPI, precisó que el ejercicio de las funciones públicas puede estar a cargo de entidades que no pertenecen orgánicamente a la estructura del Estado, señalando que no toda persona pública es estatal. Dentro de estas entidades, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o funciones que realizan, se encuentran las corporaciones formadas por personas o empresas que ejercen una misma actividad, siendo las leyes o la Constitución las que le otorgan personalidad jurídica de Derecho Público. Con estas, por supuesto, se refería a los colegios profesionales.

Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI

En este caso en particular, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas desarrolló la naturaleza jurídica del Colegio de Ingenieros del Perú, señalando que ejercían función administrativa cuando otorgaban la colegiatura a sus miembros, dado que esta era obligatoria y un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de ingeniero, por lo que el colegio profesional ejercía una potestad administrativa. Sobre esto, al ser una resolución similar a la desarrollada en el presente informe, nos relegaremos de opinión para el final de este capítulo.

Resolución 0096-2018/CEB-INDECOPI

En este caso, en el que estuvo involucrado como denunciado el Colegio de Arquitectos del Perú, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para determinar si este ejercía función administrativa, se remitió a lo dispuesto en la Ley N° 14085, en la Ley N° 16053 y en la Ley N° 28966, en la que se advirtió una delegación legal en favor del colegio profesional para incorporar a su gremio a los profesionales en arquitectura como condición para ejercer dicha profesión, convirtiéndose tal incorporación en el único medio a través del cual se encuentran habilitados para ejercerla. En ese sentido, la Comisión concluyó que el Colegio de Arquitectos del Perú, al ser una entidad de la administración pública, le son aplicables las normas y principios contemplados en el TUO de la LPAG.

Resolución 0561-2019/SEL-INDECOPI

En este caso, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resaltó que independientemente de si una entidad recibe financiamiento o presupuesto por parte del Estado, en tanto por la naturaleza de sus actividades ejerza función administrativa será considerada como parte de la Administración Pública, en el marco de dichas funciones que realice. Así, declaró que el Colegio de Abogados de Tacna, al otorgar la colegiatura para que los abogados ejerzan el patrocinio judicial, ejerce función administrativa y, por tanto, conforman parte de las entidades de la Administración Pública, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1 del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Como vemos, en todos los casos citados, tanto la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas como la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas han hecho referencia a que los colegios profesionales tienen una naturaleza sui generis, en tanto son entes públicos no estatales creados por ley que: i) realizan funciones privadas

en beneficio de sus agremiados y en defensa de los intereses de estos últimos, y ii) por otro, ejercen funciones administrativas reguladas por las normas de derecho público.

Ello se desprende del contenido de pronunciamientos importantes anteriores recaídos, por ejemplo, en la Resolución N°1180-2007/TDC-INDECOPI, que estableció expresamente lo siguiente:

“(…) El factor que determina que una persona de derecho privado se asimila a una entidad administrativa no son los términos en que fue creada, el régimen laboral de su personal o la recepción de fondos públicos, sino la naturaleza de las funciones que desarrolla. Por tal motivo, se concluyó que, si sus pronunciamientos son vinculantes para los particulares que actúan en una industria u oficio determinado, no por disposiciones contractuales sino por el poder de imperio propio del Estado que ejerce dicha entidad privada, entonces estaremos frente al ejercicio de funciones públicas sin que ello implique una modificación del régimen privado bajo el cual se organice la persona jurídica en cuestión.”

De igual forme, la Resolución N°0033-2006-INDECOPI/CLC señaló convenientemente lo siguiente:

“(…) La función administrativa es realizada no sólo por el Gobierno sino también (...) por personas jurídicas bajo régimen privado que por delegación, concesión o autorización legal realizan función administrativa (...) cabe señalar que, si bien la función administrativa es realizada generalmente por entidades que forman parte de la Administración Pública, por excepción, pueden haber supuestos en los cuales se puede delegar el ejercicio de dichas potestades públicas a entidades o personas privadas respecto a ciertas actuaciones. Así, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el caso de los notarios, colegios profesionales, universidades (...)”.

Se concluye, entonces, que los colegios profesionales ejercen, en determinados ámbitos, función administrativa y que han sido incluidos en el artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG, como parte de las “entidades” de la Administración Pública. Los

ejemplos citados refieren que realizan esta función, sobre todo, al momento de otorgar la colegiatura a los profesionales respectivos.

Las funciones del Colegio de Ingenieros del Perú

Mediante Ley N°24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, se creó el CIP como una institución autónoma con personería jurídica de Derecho Público representativa de la profesión de ingeniería en el Perú. Al respecto, el artículo 1 de la referida ley señala expresamente lo siguiente:

“Artículo 1.- El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar, a nombre de la Nación, el título de ingeniero. Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país”.

Como se observa, según lo establecido en la norma de su creación, la colegiación resulta obligatoria para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país. Es decir, sin colegiatura los ingenieros se verían impedidos o restringidos de ejercer su carrera. Esta alternativa se rige, como ya vimos, por lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política.

Asimismo, el artículo 1 de la Ley 28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al CIP para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República, establece lo siguiente:

“Artículo 1.- Requisitos para el ejercicio profesional

Todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a la Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, N° 16053, requiere poseer grado académico y título profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera

debidamente revalidado en el país, estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú”.

Este apartado dispone que, para ejercer las labores propias de la ingeniería en el país, se requiere poseer grado académico y título profesional, y estar colegiado y habilitado por el CIP.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley N°24648 señala que el Estatuto constituye la norma que establece las reglas de colegiación de los profesionales en ingeniería y conforma la base de su estructura orgánica. Siendo así, el CIP, de conformidad con la autonomía constitucional reconocida, ya desarrollada en los párrafos anteriores del presente informe, será quien regule el procedimiento para la incorporación de sus miembros, así como los requisitos y condiciones requeridos para tales fines.

En tal sentido, se denota expresamente una delegación legal en favor del CIP para incorporar a su gremio a los profesionales en ingeniería como condición para ejercer dicha profesión, convirtiéndose tal incorporación en el único medio a través del cual se encuentran habilitados para ejercerla.

Consiguientemente, aunque ya evidenciado varios rasgos al respecto, evaluemos si la habilitación de la colegiatura por parte del CIP supone el ejercicio de función administrativa.

Determinar si el Colegio de Ingenieros del Perú ejerce función administrativa cuando otorga la colegiatura a los profesionales de ingeniería

Como se ha expuesto, el artículo 20 de nuestro texto constitucional confiere al legislador la facultad para determinar los casos en los que la colegiación será obligatoria. En este contexto, el artículo 1 de la Ley N°24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú ha dispuesto la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país.

Ahora, según lo establecido por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante Resolución 0116-2018/SEL-INDECOPI, para analizar si un colegio profesional, a través de algunas de sus actuaciones, ejerce función administrativa, se debe atender necesariamente a la naturaleza de las funciones que realiza, es decir, se debe evaluar si sus decisiones tienen carácter de obligatoriedad, en la medida que representan una manifestación del ius imperium estatal.

En ese sentido, la Resolución N°0549-2019/SEL-INDECOPI, materia de análisis, dispone en su desarrollo que, debido a la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional de la ingeniería en el país como mecanismo para habilitar a los ingenieros, conforme a las normas peruanas aplicables, señaladas en el punto anterior, el CIP ejerce función administrativa, motivo por el cual deberá respetar las disposiciones que le rigen a esta, en especial observancia del principio de legalidad y, por ende, de las normas del ordenamiento jurídico vigente, como el contenido de lo establecido en el TUO de la LPAG. En efecto, el CIP al otorgar la colegiatura a los profesionales en ingeniería, condición imperativa para su práctica profesional, ejerce una potestad administrativa, actividad de policía de la Administración Pública, vinculada con la habilitación a estos profesionales para realizar una determinada actividad económica relacionadas con su carrera. Esta potestad, como ya se mencionó, ha sido atribuida por la normativa citada en el punto anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el CIP ejerce función administrativa al conceder la colegiatura a los profesionales en ingeniería, condición que es imperativa para el ejercicio de esta profesión, pero, además, la ejercerá, también, en cuanto sus decisiones posean como fundamento potestades públicas delegadas. En consecuencia, deberá aplicársele las normas administrativas correspondientes como lo dispuesto en el TUO de la LPAG, normas de implicación administrativa, entre otras. Por otro lado, cuando sus actividades no recaigan en potestades públicas, se les aplicará la respectiva normativa privada. Esta distinción se deriva de la naturaleza jurídico mixta que poseen los colegios profesionales al velar no solo por la defensa de sus propios miembros y concreción de sus fines particulares, sino también de acuerdo a las facultades y competencias públicas encomendadas por el Estado.

Capítulo II: ¿El Colegio de Ingenieros del Perú estableció medidas discriminatorias para la obtención de la colegiatura ordinaria entre los profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros?

En el presente capítulo, determinaremos si la diferenciación por parte del CIP entre los profesionales en ingeniería peruanos y extranjeros, para la obtención de la colegiatura ordinaria, configuraría una medida discriminatoria. Para ello, por un lado, analizaremos qué se entiende por discriminación y cuándo es que un tratamiento distintivo no supone un acto de esta índole. Con ese enfoque, por otro lado, repasaremos las modalidades de colegiatura establecidas en el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú del año 2018,

así como los requisitos para acceder a este, reguladas en el Reglamento de Colegiación 2018.

¿Qué es la discriminación?

La discriminación es el trato diferenciado basado en determinados motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, cuyo objeto es la anulación o menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y libertades fundamentales de una persona o de un grupo de personas (Defensoría del Pueblo, 2007, p.29). Al respecto, nuestro texto constitucional ha establecido en el inciso 2 del artículo 2 lo siguiente:

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Como se desprende de su lectura, nuestra Constitución no admite la posibilidad de generar diferencias basadas en criterios prohibidos como los indicados expresamente en el citado o los que posean la misma índole. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional se ha expresado en reiteradas ocasiones, como en la sentencia recaída en el Expediente N° 01423 -2013 -PA/TC, que en remembranza de la sentencia N°0045-2004-AI, señaló en su fundamento 18, que la igualdad consagrada constitucionalmente, posee una doble condición de principio y de derecho subjetivo constitucional, desarrollando lo siguiente:

“Como principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que jurídicamente resulten relevantes”.

Así, la protección concedida por este fundamental principio-derecho, rebasa toda la esfera constitucional y personal del individuo en la sociedad, no dejando espacios para vulneraciones o contravenciones a tal disposición.

En ese mismo sentido, mediante sentencia recaída en el Expediente N°0606-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional, en sus fundamentos 10 y 11, ha señalado la doble dimensión que posee este principio-derecho, estableciendo lo siguiente:

“El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o la circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual”.

Como se observa, el derecho a la igualdad en su dimensión formal, establece una prohibición al legislador, a la Administración Pública y los órganos jurisdiccionales de realizar diferencias injustificadas. Por su parte, en su dimensión material, además de la abstención de tratos discriminatorios, ratifica el tratamiento igual en circunstancias iguales y desigual si es que dos sujetos no se encuentran en las mismas condiciones o situación legal (exigencia negativa y positiva).

Siendo así, entonces, la Administración Pública también posee el deber de no incurrir en estos actos, lo que se denota en lo expuesto en el TUO de la LPAG, el cual regula una serie de principios del procedimiento administrativo, cuyos elementos son considerados

básicos para “encausar, controlar y limitar la Actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento” (Morón, 2020, p.76), y, entre los cuales figuran algunos encausados al derecho a la igualdad consagrado constitucionalmente, los que pasaremos a detallar a continuación:

“Principios del Procedimiento Administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.5. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

(...)

1.14. Principio de uniformidad. - La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidas en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

(...)”.

Asimismo, el inciso 2 del artículo 66 del mismo texto normativo, señala como derecho de los administrados el “ser tratado con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados”. Así, Morón (2020) refiere que se producirá discriminación cuando la Administración trate, sin justificación objetiva, de forma desigual a hechos iguales o hechos desiguales que sean tramitados o resueltos de igual modo. Por el contrario, si resultase fundada objetivamente la diferencia de trato, la decisión que emita la Administración tendrá el debido respaldo jurídico (p.507).

Por su parte, el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece lo siguiente:

Artículo 12.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen, ni basándose en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras.

Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en cualquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad.

Tal como se puede contemplar, los artículos citados guardan relación, con sus matices correspondientes, con la finalidad del derecho fundamental a la igualdad reconocido en nuestra norma constitucional. Así, respecto al principio de imparcialidad en sede administrativa, es importante conocer lo señalado por el Tribunal Constitucional, que, mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 1279-2002-AA ha establecido lo siguiente:

“(…) en sede administrativa, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley o una disposición de una ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de los administrados. Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano administrativo de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y subjetivas, carentes de una base objetiva y razonable que la legitime (…)”.

Los administrados, entonces, deben recibir por parte de la Administración un tratamiento procedimental igualitario o semejante, en cuanto a derechos y deberes.

Distinción entre discriminación y trato diferenciado justificado

Se ha dejado entrever, de lo señalado hasta el momento, que pueden existir supuestos en los que el trato diferenciado posee una justificación objetiva y razonable, siendo incompatible ello con los denominados actos discriminatorios. En efecto, sobre ello, el

Tribunal Constitucional ya ha emitido distintos pronunciamientos, como en la sentencia recaída en los Expedientes Acumulados N° 0001-2003-AI/TC y N° 0003-2003-AI/TC, en la que señaló que “el principio de igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse por igual a todos, sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda introducir obedezcan a razones objetivas y razonables”. Asimismo, mediante sentencia recaída en el Expediente N° 0018-2003-AI/TC, el Tribunal ha enfatizado que la noción de igualdad ante la ley no se discierne con la existencia de normas diferenciadoras, a condición de que se acrediten los siguientes supuestos:

- a. La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia de la diferenciación.
- b. La acreditación de una finalidad específica.
- c. La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales;
- d. La existencia de proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad.
- e. La existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho el medio empleado y la finalidad que se persigue.

Es decir, existen supuestos de tratos diferenciados justificados que no dan lugar a discriminación, aunque pudiesen generar cierto menoscabo a los derechos de los interesados. Estos persiguen una finalidad legítima y proporcional, además de poseer una conexión efectiva entre el trato diferente y los supuestos de hecho a modificar (Defensoría del Pueblo, 2007, p.39).

Siendo así, en concordancia con los dos puntos desarrollados, podemos colegir, por un lado, que, el CIP, al ejercer función administrativa, debe respetar plenamente las disposiciones emitidas por la Administración Pública, relacionadas al derecho a la igualdad de los administrados. Por otro lado, se remarca que existen supuestos en los que

el tratamiento diferenciado puede estar justificado, siempre y cuando atiendas a criterios objetivos y razonables.

En lo que sigue, analizaremos si las modalidades de colegiatura establecidas en el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú del año 2018, así como los requisitos para acceder a este, reguladas en el Reglamento de Colegiación 2018, han establecido medidas discriminatorias, para la obtención de la colegiatura ordinaria, entre los profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros.

Modalidades de colegiaturas reguladas en el Estatuto del Colegio de Ingeniero del Perú del año 2018.

Como ya fue mencionado en el Capítulo I del presente trabajo, el artículo 1 de la Ley N°24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, estableció que la colegiación resulta obligatoria para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país. Asimismo, el artículo 1 de la Ley 28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al CIP, dispuso que, para ejercer las labores propias de la ingeniería en el país, se requiere poseer grado académico, título profesional, y estar colegiado y habilitado por el CIP. Por su parte, el artículo 6 de la Ley N°24648 señala que el Estatuto constituye la norma que establece las reglas de colegiación de los profesionales en ingeniería y conforma la base de su estructura orgánica.

En ese sentido, el artículo 3.02 en concordancia con el 3.03 del Estatuto del CIP 2018, señala que, para ejercer la profesión de Ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario, Vitalicio o Temporal del CIP y encontrarse habilitado, con la añadidura de los que poseen la calidad de Miembros Honorarios. Es decir, regula expresamente que existen cuatro tipos de colegiatura, para conformar parte del CIP, los cuales, a continuación, detallaremos brevemente:

“a. Ingenieros Ordinarios son aquellos incorporados al CIP, que cuentan con Título Profesional expedido por Universidad Peruana, que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria. Su registro es único y permanente.

Asimismo, son Ingenieros Ordinarios **los peruanos que han concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de**

estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley.

También podrán incorporarse como Ingenieros Ordinarios los profesionales en ingeniería registrados en Colegios Profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.

b. Ingenieros Vitalicios son aquellos ingenieros ordinarios que han aportado sus cuotas institucionales por 30 años. Al adquirir la condición de ingeniero vitalicio, su habilitación para el ejercicio de la profesión es permanente, salvo sanción institucional o judicial. Mantendrán el número de registro de su incorporación (...).

c. Ingenieros Temporales son los ingenieros extranjeros a quienes la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria o la entidad que cumpla dicha función reconoce su título profesional en ingeniería (...).

d. Son Miembros Honorarios las personas naturales, nacionales o extranjeras que por méritos especiales o actos que comprometen la gratitud del CIP, son merecedores de tal distinción (...)” (negrita y subrayado nuestro).

Siendo así, podemos señalar que estas son las únicas modalidades por las que un profesional ingeniero puede formar parte del CIP. Cabe precisar que, para cumplir con cada uno de estos tipos, además de lo incluido en su texto formal, se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Colegiación 2018, el cual contiene el detalle de los requisitos.

En lo que concierne al presente informe, se extenderá el desarrollo únicamente de la calidad de Miembro Ordinario del CIP, con su descripción completa y requisitos para tal.

Requisitos para acceder a la colegiatura, según lo establecido en el Reglamento de Colegiación 2018.

El Reglamento de Colegiación 2018 del CIP establece el procedimiento de colegiación que deben seguir los profesionales en ingeniería para su incorporación al CIP como

ingenieros ordinarios. Así, el artículo 16 de dicho instrumento normativo señala lo siguiente:

“Artículo 16. ° El ingeniero postulante debe acompañar a su solicitud los documentos pertinentes que demuestren:

a. **Cumplir con alguna de las exigencias del inciso a) del Artículo 3.03 del Estatuto del CIP** y lo indicado en el Reglamento de Colegiación, es decir:

- Contar con Título Profesional expedido por Universidad Peruana que acrediten cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria; o también
- **Ser ciudadano peruano y haber concluido estudios de Ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley;** o también
- Acreditar ser profesional en Ingeniería registrado en Colegio Profesional del extranjero con el cual el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.

b. Aprobar la evaluación de las normas institucionales y deontológicas del CIP” (negrita y subrayado nuestro).

Estas son las condiciones que deberán cumplir los profesionales de ingeniería que deseen incorporarse al CIP; caso contrario, se verán impedidos de constituirse como miembros ordinarios.

Determinar si el Colegio de Ingenieros del Perú estableció medidas discriminatorias para la obtención de la colegiatura ordinaria entre los profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros

Los apartados citados, y en los que se ha puesto énfasis, tanto del Estatuto 2018 del CIP, como de su Reglamento de Colegiación, además de los conceptos revisados con anterioridad a ello, sirven de sustento suficiente para determinar si es que la decisión emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante Resolución N° 0549-2019/SEL-INDECOPI fue correcta o no.

Tal como se ha detallado en ambos documentos normativos de gestión del CIP, para que los profesionales de ingeniería puedan obtener la colegiatura como miembros ordinarios del CIP, deben necesariamente cumplir con lo dispuesto en el numeral 3.03 de su Estatuto y lo señalado en el artículo 16 del Reglamento de Colegiación. En ese sentido, se exponen tres opciones para la obtención de la colegiatura ordinaria. No obstante, y este el núcleo del presente capítulo, se evidencia una diferenciación en consideración de la nacionalidad de la persona aspirante, para proceder con el referido procedimiento. Así, mientras que los aspirantes de nacionalidad peruana poseen tres vías para la obtención de este tipo de colegiatura, los de nacionalidad extranjera solo poseen dos. Esta particularidad se muestra en el siguiente cuadro, el cual ha sido incluido, también, por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas:

Nacionalidad del aspirante	Peruana	Extranjera
Supuestos en los que se permite el acceso a la colegiatura ordinaria	Si cuenta con <u>Título Profesional expedido por universidad peruana</u> , que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria.	Si cuenta con <u>Título Profesional expedido por universidad peruana</u> , que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria.
	Si ha concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente	

	acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por ley.	
	Si el profesional aspirante en ingeniería está registrado en algún <u>colegio profesional del extranjero</u> con los cuales el CIP tenga convenios específicos de mutuo reconocimiento.	Si el profesional aspirante en ingeniería está registrado en algún <u>colegio profesional del extranjero</u> con los cuales el CIP tenga convenios específicos de mutuo reconocimiento.

Como se mencionó, para este segundo supuesto el Estatuto y el Reglamento de Colegiación del CIP establecían lo siguiente:

Estatuto del CIP 2018

“(…) Asimismo, son Ingenieros Ordinarios **los peruanos que han concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley** (…)”
(negrita y subrayado nuestro).

Reglamento de Colegiación 2018

“(…) Ser ciudadano peruano y haber concluido estudios de Ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por

universidad peruana autorizada por Ley (...)” (negrita y subrayado nuestro).

De este modo, se demuestra que el Estatuto y el Reglamento de Colegiación 2018 del CIP, en este punto, han establecido una restricción para la colegiatura ordinaria que no obedece a una circunstancia objetiva, pues solo responde a la nacionalidad del aspirante. Siguiendo esa línea, el profesional en ingeniería extranjero que cuente con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana, no podrá obtener la colegiatura ordinaria (exigen ser ciudadano peruano), contrariamente a lo que dispuesto para los profesionales en ingeniería peruanos que se encuentren en las mismas condiciones.

Por lo expuesto, siendo que tal diferenciación supone la existencia de situaciones de hecho similares, pero con consecuencias diferentes, y, por tanto, no obedece a criterios objetivos ni razonables, coincidimos con lo decretado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, en el sentido de que la restricción impuesta por el CIP constituye una medida discriminatoria y, por ende, ilegal, ya que vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como los principios de uniformidad e imparcialidad y el artículo 66 previstos en el TUO de la LPAG.

En tal sentido, en el caso, la Sala confirmó lo establecido en la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, que declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación 2018.

CONCLUSIONES

- i. Los colegios profesionales poseen una naturaleza jurídico mixta, pues tienen asignadas potestades administrativas y también realizan actividades netamente privadas, en las que velan por sus propios fines y los de sus agremiados. En tal sentido, resulta apropiado que se enmarquen dentro de lo dispuesto por el numeral

8 del artículo I del TUO de la LPAG, al tratarse de personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función administrativa en determinados supuestos.

- ii. El CIP ejerce función administrativa al otorgarles la colegiatura a los profesionales ingenieros, condición que, de acuerdo a lo establecido el artículo 1 de la Ley N°24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, así como lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al CIP, es imperativa para el ejercicio de esta profesión. Asimismo, la ejerce, también, en cuanto sus decisiones posean como fundamento potestades públicas delegadas. En consecuencia, deberá aplicársele las normas administrativas correspondientes como lo dispuesto en el TUO de la LPAG y demás normas de la misma índole.
- iii. A las demás actuaciones del CIP, que no estén vinculadas a potestades públicas delegadas, y en la que, por ende, no se ejerza función administrativa, tales como sus funciones educativas, conferencias u otras de carácter privado, se les aplicará las normas jurídico-privadas.
- iv. El artículo 6 de la Ley N°24648 señala que el Estatuto constituye la norma que establece las reglas de colegiación de los profesionales en ingeniería y conforma la base de su estructura orgánica. Siendo así, el artículo 3.02 en concordancia con el 3.03 del Estatuto del CIP 2018, estableció que, para ejercer la profesión de Ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario, Vitalicio o Temporal del CIP y encontrarse habilitado, con la añadidura de los que poseen la calidad de Miembros Honorarios. Ello fue complementado por el Reglamento de Colegiación del CIP.
- v. Se ha verificado, luego del análisis respectivo, que tales documentos de gestión normativos han establecido una restricción para la colegiatura ordinaria que no obedece a una circunstancia objetiva, pues solo responde a la nacionalidad del aspirante. En esa línea, el profesional en ingeniería extranjero que cuente con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana, no podrá obtener la colegiatura ordinaria (exigen ser ciudadano peruano), contrariamente a lo que dispuesto para los profesionales en ingeniería peruanos que se encuentren en las mismas

condiciones, lo que constituye una medida discriminatoria y, por ende, ilegal, ya que vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como los principios de uniformidad e imparcialidad y el artículo 66 previstos en el TUO de la LPAG.

BIBLIOGRAFÍA

ABRUÑA, Antonio (2010). Delimitación jurídica de la Administración Pública en el ordenamiento peruano. Lima: Palestra Editores. Consulta: 22 de mayo de 2021.

<https://revistas.udelpe.edu.pe/derecho/article/view/2077>

ARIÑO, Gaspar (1973). Corporaciones profesionales y Administración Pública”. *Revista de Administración Pública*. Madrid, número 72 (pp. 27-72). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2112634>

BAENA, Mariano (1997). La nueva regulación de los Colegios Profesionales. La reestructuración por la vía de la defensa de la competencia. *Revista Derecho Privado y Constitución*. Madrid, número 11 (pp. 11-37). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=181989>

COSCULLUELA, Luis (2003). Manual de Derecho Administrativo. 14° edición. Madrid: Thomson Civitas.

DEFENSORIA DEL PUEBLO (2007). La discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas pendientes. Lima. Consulta: 01 de mayo de 2021.

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session2/PE/DP_PER_URP_S2_2008anx_anexo2dd002_07.pdf

DEFENSORIA DEL PUEBLO (2009). Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Lima. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-005-2009-DP-ADHPD-vf.pdf>

DROMI, Roberto (2009). Derecho Administrativo. 13va. edición. Buenos Aires: Ciudad Argentina.

EGUIGUREN, Francisco (1997). Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. *IUS ET VERITAS*. Lima, número 8(15) (pp. 63-72). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15730/16166>

GUZMÁN, Christian (2008). Un acercamiento al concepto de función administrativa en el Estado de Derecho. *Derecho & Sociedad*. Lima, número 31 (pp. 285-291). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17412/17693>

HUERTA, Luis (2005). El derecho a la igualdad. *Pensamiento Constitucional*. Lima, número 11(11) (pp. 307-334). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/7686/7932>

LÓPEZ, José Luis (2001). Lo público y lo privado en los colegios profesionales. *Boletín del Ministerio de Justicia*. Madrid, número 1896 (pp. 2215-2234). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=78680>

MARTIN, Richard (2011). El Concepto de Entidad Pública en el Ordenamiento Jurídico Peruano y su Incidencia en el Régimen de Organización de la Administración Pública. *Derecho & Sociedad*, (36) (pp.103-119). Consulta: 22 de mayo de 2021.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13218>

MARTIN, Richard (2012). Los actos administrativos en el régimen de las personas jurídicas del régimen privado. *Revista de Derecho Administrativo*, (12) (pp.171-185). Consulta: 22 de mayo de 2021.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13501>

MORÓN, Juan Carlos (2020). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 15° edición. Lima: Gaceta Jurídica.

OCHOA, Francisco (2014). Fundamentos del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Lima, número 19 (Vol.10) (pp. 1-56). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/10/9>

POMED, Luis (2010). Actividades profesionales y colegios profesionales. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, número 12 (pp. 379-405). Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573358>

RUBIO, Marcial (2009). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima edición aumentada. Lima: Fondo Editorial PUCP.

SANTAMARIA, Juan (2002). Principios del Derecho Administrativo. Volumen I, 4ta edición. Madrid: Colección Ceura, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2002). Sentencia recaída en el Expediente N° 1279-2002-AA. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01279-2002-AA.html>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2003). Sentencia recaída en el Expediente N° 0018-2003-AI/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00018-2003-AI.html>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2004). Sentencia recaída en el Expediente N° 0606-2004-AA/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.pdf>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2006). Sentencia recaída en el Expediente N° 0027-2005-PI/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00027-2005-AI.html>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2006). Sentencia recaída en el Expediente N° 3954-2006-PA/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03954-2006-AA.html>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2008). Sentencia recaída en el Expediente N° 05652-2007-PA/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/05652-2007-AA.pdf>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2009). Sentencia recaída en el Expediente N° 5691-2008-PA/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05691-2008-AA%20Resolucion.pdf>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2015). Sentencia recaída en el Expediente N° 01423-2013-PA/TC. Consulta: 01 de mayo de 2021.

<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/01423-2013-AA.pdf>

**RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL-INDECOPI**

- Resolución 0079-2017/CEB-INDECOPI.
- Resolución 0116-2018/SEL-INDECOPI.
- Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI.
- Resolución 0096-2018/CEB-INDECOPI.
- Resolución 0561-2019/SEL-INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

PROCEDENCIA : COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
BUROCRÁTICAS
DENUNCIANTE : BORJA LÓPEZ LASALA¹
DENUNCIADO : COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
MATERIA : LEGALIDAD
RAZONABILIDAD
ACTIVIDAD : COLEGIOS PROFESIONALES

SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

La razón es que la restricción impuesta por el Colegio de Ingenieros del Perú constituye una medida discriminatoria, en tanto que no permite que los profesionales en ingeniería extranjeros que cumplen las mencionadas condiciones obtengan la colegiatura ordinaria, contrariamente a lo que ocurre con los profesionales peruanos que se encuentran en la misma situación, quienes sí podrían colegiarse, lo cual implica una vulneración al artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, así como a los principios de uniformidad e imparcialidad contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y al artículo 66 de esta última norma.

Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que declaró carente de razonabilidad la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

Este pronunciamiento tiene como sustento que, si bien la medida no es ilegal en tanto que la Ley 24648, Ley del Colegio de Ingenieros del Perú, señala que dicha entidad cuenta con facultades para emitir las normas que regulan la colegiación, no ha quedado demostrado que la medida en cuestión no resulte arbitraria y/o desproporcionada.

¹ Identificado con Carné de Extranjería 001304125.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

Lima, 28 de noviembre de 2019


I. ANTECEDENTES

1. El 11 de septiembre de 2018², el señor Borja López Lasala (en adelante, el denunciante) interpuso una denuncia contra el Colegio de Ingenieros del Perú (en adelante, el CIP) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:

- (i) El tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).
- (ii) La exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deben ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

2. El denunciante fundamentó su denuncia del siguiente modo:

- (i) Es un profesional de nacionalidad española, graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid (España), con título de Ingeniero reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu), interesado en obtener una colegiatura ordinaria en el CIP, toda vez que reside en el Perú desde hace tres (3) años, aproximadamente.
- (ii) La única opción admitida en el Estatuto y en el Reglamento del CIP para profesionales ingenieros extranjeros con estudios en universidades extranjeras, es que estén registrados en un colegio profesional extranjero con el cual tengan un convenio específico.
- (iii) La medida señalada en el punto (ii) del numeral 1 de la presente resolución contraviene lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo 34 del

 ² La denuncia fue precisada por escritos de fechas 27 de septiembre y 4 de octubre de 2018, en mérito del requerimiento formulado por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Carta 0636-2018/INDECOPI-CEB del 24 de septiembre de 2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

Reglamento del CIP, toda vez que estos últimos ya acreditan la capacidad profesional del solicitante.

- (iv) Asimismo, la medida impide de facto el ejercicio de la profesión al solicitante que no conozca o encuentre a los profesionales ingenieros con los criterios exigidos, pese a contar con un permiso de trabajo en el Perú.
 - (v) El CIP no ha justificado la medida ya que, mediante el procedimiento de reconocimiento por parte de la Sunedu del título profesional expedido en el extranjero, queda acreditada la capacidad del ingeniero para el ejercicio de la profesión. No obstante, la imposición de la medida lo obliga a depender de terceras personas para poder obtener una colegiatura temporal.
 - (vi) De acuerdo con la configuración del propio sistema de colegiatura del CIP, a los profesionales ingenieros extranjeros (sin Documento Nacional de Identidad) se les permite únicamente solicitar una colegiatura temporal y no ordinaria.
3. Por Resolución 0510-2018/CEB-INDECOPI del 19 de octubre de 2018, la Comisión admitió a trámite la denuncia por las medidas indicadas en el numeral 1 del presente pronunciamiento³.
4. El 14 de noviembre de 2018, el CIP presentó sus descargos.
5. Mediante Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, la Comisión determinó⁴:

³ Asimismo, la Comisión admitió a trámite la denuncia por la imposición de las siguientes medidas:

- (i) El tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, contando con un diploma o título de ingeniería (expedido por una universidad extranjera) reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, puedan obtener una colegiatura ordinaria en el CIP, materializada en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto CIP 2017.
- (ii) La exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deben aprobar la evaluación de conocimientos de las normas de ingeniería peruana de su especialidad como condición para obtener la colegiatura temporal en el CIP, materializada en el literal d) del artículo 3.07 del Estatuto del CIP 2017 y en el literal c) del artículo 33 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

Al respecto, si bien la primera instancia emitió pronunciamiento respecto a tales extremos de la denuncia mediante Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, estos no serán evaluados por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, dado que resultaron favorables para el CIP, quien interpuso recurso de apelación contra dicho acto administrativo en lo que corresponde a las medidas indicadas en el numeral 1 de la presente resolución.

⁴ La primera instancia determinó, adicionalmente, lo siguiente:

- (i) Disponer la inaplicación de las medidas declaradas barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, respectivamente, en favor del denunciante.
- (ii) Disponer la inaplicación, con efectos generales, de la barrera burocrática declarada ilegal en favor de todos los agentes económicos y/o ciudadanos en general que se vean afectados por su imposición, a partir del día siguiente de publicado el extracto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.
- (iii) Disponer la publicación de un extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

- (i) Declarar barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).
 - (ii) Declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deben ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).
6. Los fundamentos del pronunciamiento de la primera pueden resumirse del siguiente modo:
- (i) La restricción cuestionada no ha sido debidamente justificada por el CIP, ni se ha acreditado las razones por las cuales se hace una distinción entre el tratamiento que se brinda a los profesionales en ingeniería extranjeros respecto de los profesionales peruanos para efectos de obtener la colegiatura ordinaria.
 - (ii) La exigencia denunciada detalladas en el punto (ii) del numeral precedente es legal de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 24648; sin embargo, el CIP no ha presentado la información que permita demostrar la razonabilidad de la medida en cuestión.
7. El 27 de marzo de 2019, el CIP interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, señalando lo siguiente:

Respecto de la restricción para obtener la colegiatura ordinaria

- (i) La Comisión no ha considerado que la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Sala) se pronunció en un procedimiento anterior (donde se emitió la Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI) declarando que el Estatuto y el Reglamento de Incorporación no contienen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad,
- (iv) Ordenar como medida correctiva que el CIP informe a los administrados acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales y carentes de razonabilidad en el presente procedimiento
- (v) Disponer que el CIP informe las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la primera instancia.
- (vi) Denegar la solicitud de confidencialidad de la información presentada por el CIP.
- (vii) Ordenar al CIP que cumpla con pagar al denunciante las costas del procedimiento.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

siendo que en ambos casos la medida cuestionada trata sobre la misma figura: la colegiación ordinaria.

- (ii) Si bien el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO), señala que los criterios interpretativos pueden ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior, en este caso la primera instancia no justifica por qué no siguió el criterio de la Sala.
- (iii) La Comisión no ha verificado que el CIP restringe la colegiatura ordinaria para los ingenieros extranjeros, por lo cual no se acredita la barrera burocrática a la que alude el denunciante.
- (iv) No se ha hecho un estudio completo del literal a) del numeral 3.03 del Estatuto del CIP, referido a los ingenieros ordinarios, el cual señala que también podrán incorporarse en esta modalidad aquellos profesionales registrados en los colegios profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento, además de que el Reglamento de Colegiación brinda tres alternativas para incorporarse como colegiado ordinario.
- (v) Conforme lo señala la Comisión en los numerales 95, 96 y 97 de su pronunciamiento, no existe barrera burocrática ilegal en el tratamiento entre profesionales en ingeniería peruanos y extranjeros.

Sobre la exigencia de ser presentado por 3 (tres) miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

- (vi) La Comisión no ha considerado que la medida ya se encontraba prevista en un reglamento anterior, el cual fue evaluado en la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI y no se formuló ninguna observación al respecto.
- (vii) La medida tiene sustento en el hecho de que, anteriormente, las resoluciones emitidas por la entonces Asociación Nacional de Rectores (ANR) no representaban ninguna garantía y los contratos de trabajo que se presentaban eran casi un negocio para las empresas.
- (viii) Las empresas que piden la colegiación de sus profesionales extranjeros suelen enviar cartas firmadas por los propios ingenieros peruanos que laboran en ella y por las cuales presentan a los profesionales extranjeros que solicitan la colegiatura temporal.
- (ix) Es un hecho de conocimiento general la abundancia de documentos que son falsificados, por lo cual se pide que la presentación esté a cargo de profesionales peruanos, quienes garantizan al aspirante.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

Sobre el pedido de confidencialidad de documentos

- (x) El pedido tiene como sustento que no resulta necesario hacer público el debate suscitado para la aprobación de los Estatutos ni las opiniones de los miembros del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del CIP.
- 8. El 26 de julio de 2019, el denunciante solicitó que se ordene una medida cautelar consistente en la inaplicación de las medidas cuestionadas.
- 9. El 12 de agosto de 2019, el denunciante absolvió el escrito de apelación presentado por el CIP⁵.
- 10. El 18 de octubre de 2019, el denunciante formuló argumentos adicionales.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

- (i) Evaluar si corresponde declarar la confidencialidad solicitada por el CIP.
- (ii) Determinar si las medidas indicadas en el numeral 1 de la presente resolución constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el pedido de confidencialidad

- 11. Por Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, la Comisión denegó la solicitud de confidencialidad del CIP respecto de los documentos anexos a su escrito del 7 de febrero de 2019, presentados en virtud del requerimiento de información formulado por Carta 0281-2019/INDECOPI-CEB del 30 de enero de 2019.
- 12. El CIP impugnó la denegatoria de su pedido de confidencialidad alegando que este tiene como sustento que no resulta necesario hacer público el debate suscitado para la aprobación de los estatutos ni las opiniones de los miembros del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del CIP.
- 13. De acuerdo con el numeral 2.1 de la Directiva 001-2008-TRI-INDECOPI, Directiva sobre confidencialidad de la información en los procedimientos

⁵ En dicho escrito, el denunciante señaló que se habría producido inconvenientes con la notificación de la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI y de la Resolución 203-2019/STCEB-INDECOPI. Al respecto, debe precisarse que, respecto a la notificación de la primera resolución, la SEL determinó que se había cumplido con las disposiciones de la Directiva 001-2013/TRI-INDECOPI, Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del Indecopi. Por otro lado, en lo que corresponde a la notificación de la Resolución 203-2019/STCEB-INDECOPI, por la cual se concedió el recurso de apelación del CIP, es de notar que el denunciante tomó conocimiento de dicho recurso y absolvió los argumentos planteados por la entidad denunciada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

seguidos por los órganos funcionales del Indecopi⁶ (en adelante, la Directiva 001-2008), podrá considerarse **confidencial** la información presentada por las partes o terceros en el marco de un procedimiento seguido ante Indecopi, cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero del que el aportante la hubiere recibido, u otorgue una ventaja significativa para un competidor del aportante de la información.

14. Sobre el particular, el argumento del CIP no explica cuál sería la afectación significativa que se produciría en el supuesto de que la información contenida en las actas de sesiones del Congreso Nacional de Consejos Departamentales sea accesible junto con el expediente público.
15. Cabe señalar que, de acuerdo con lo señalado por el CIP, dichas actas contienen los debates correspondientes a la aprobación del Estatuto de la entidad, siendo que esta se ha limitado a indicar que no resulta necesario dar a conocer tales debates, mas no se especifica el perjuicio originado al CIP o a sus representantes.
16. En tal sentido, corresponde confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en el extremo que denegó el pedido de confidencialidad formulado por el CIP respecto de la documentación anexa a su escrito del 7 de febrero de 2019.
17. Asimismo, en virtud del numeral 3.9 de la Directiva 001-2008⁷, se requiere al CIP que, en un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, manifieste si desea que los referidos documentos le sean devueltos, siendo que, en caso no brinde respuesta, se dispondrá su incorporación al expediente público con el mismo tratamiento que cualquier otro documento.

DIRECTIVA 001-2008/TRI-INDECOPI. DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI

2. Información Confidencial. -

2.1. Podrá declararse confidencial aquella información presentada por las partes o terceros en el marco de un procedimiento seguido ante INDECOPI, cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero o del que el aportante la hubiere recibido, u otorgue una ventaja significativa para un competidor del aportante de la información.

(...)

(Numeral 2.1 modificado por el numeral 2.2 del Acápite II de la Directiva 002-2017-TRI-INDECOPI, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 16 marzo de 2018.)

7

DIRECTIVA 001-2008/TRI-INDECOPI. DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS ÓRGANOS FUNCIONALES DEL INDECOPI

3. Declaración de confidencialidad de la información

(...)

3.9 En aquellos casos en los que la Autoridad Administrativa resuelva no declarar confidenciales los documentos presentados, se requerirá al solicitante que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, informe si desea que tales documentos le sean devueltos, caso contrario, serán incorporados al expediente público con el mismo tratamiento que cualquier otro documento incluido en dicho expediente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

III.2. Competencia de los órganos resolutivos en materia de eliminación de barreras burocráticas y metodología de análisis

18. De conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1256, la Comisión y la Sala son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad⁸.
19. Por su parte, el artículo 3 de dicha norma legal⁹ define como barrera burocrática a aquella exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.
20. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1256¹⁰, la evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas se realiza de acuerdo con la metodología desarrollada en el

DECRETO LEGISLATIVO 1256. LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas

6.1. De la Comisión y la Sala

La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Artículo 3.- Definiciones

Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Artículo 13.- Metodología de análisis

La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas en los procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo. La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y actuaciones materiales se efectúa de acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

referido cuerpo normativo, la cual comprende los siguientes niveles: (i) análisis de legalidad¹¹; (ii) verificación de indicios; y, (iii) análisis de razonabilidad¹².

III.3. Análisis de legalidad

III.3.1 Prohibición de trato discriminatorio

21. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución), señala que la Administración Pública no puede tratar de forma distinta a los particulares que se encuentran en la misma situación por razón de su origen¹³.
22. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (en adelante, el Decreto Legislativo 757) señala que ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central,

11

DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Artículo 14.- Análisis de legalidad

14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos:

- a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis.
- b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y/o publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera burocrática.
- c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal.

14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso, determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la razón señalada en el literal a. puede declarar fundada la denuncia o el procedimiento iniciado de oficio según sea el caso, sin que sea necesario evaluar los aspectos indicados en los literales b. y c.; y así sucesivamente.

14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de las razones mencionadas en el párrafo precedente, no es necesario que la Comisión o la Sala continúe con el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la Comisión o la Sala desestima que la barrera burocrática sea ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando se cumpla la condición establecida en el artículo 15.

12

DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Artículo 18.- Análisis de razonabilidad

18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso, considera que han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la medida, verificando el cumplimiento de los siguientes elementos:

- a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que la entidad acredite:
 1. La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad.
 2. La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada.
 3. Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida.
- b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite:
 1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.
 2. Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.
 3. Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación.

18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática.

13

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho:

(...)

1. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOP

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

gobiernos regionales o locales, ni empresas del Estado, puede establecer tratamientos discriminatorios ni diferenciados entre las personas nacionales o extranjeras¹⁴.

23. En el mismo sentido, el TUO de la Ley 27444 señala que los procedimientos administrativos se rigen por los principios de imparcialidad y uniformidad¹⁵, los cuales determinan que las autoridades administrativas deberán actuar brindando a las partes tratamiento por igual y, en concordancia con ello, deberán establecer requisitos similares para trámites similares. Tales obligaciones tienen como correlato el derecho de los administrados a ser tratados en condiciones de igualdad con los demás, conforme lo dispone el artículo 66 de la norma antes mencionada¹⁶.
24. En virtud de estas disposiciones, una medida será **discriminatoria** cuando, por ejemplo, se trate de forma distinta a los particulares **en razón a su nacionalidad**, a pesar de que se encuentran en la **misma situación**. Por el contrario, el trato diferenciado entre agentes que se encuentran en situaciones distintas, es decir, que tienen diferencias objetivas entre sí, no da lugar a un supuesto de discriminación.

III.3.2 Marco normativo de la actividad del CIP

25. La Constitución define la naturaleza de los colegios profesionales, siendo que el artículo 20 del texto constitucional les otorga a dichas corporaciones personalidad jurídica pública, conforme se aprecia:

¹⁴ **DECRETO LEGISLATIVO 757, LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA**
Artículo 12.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen, ni basándose en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras.
Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en cualquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad.

¹⁵ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
(...)
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

¹⁶ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 66.- Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes:
(...)
2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

*Artículo 20.- Los colegios profesionales son **instituciones autónomas con personalidad de derecho público**. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.*

(El énfasis es añadido)

26. En este punto, resulta importante indicar que el Tribunal Constitucional, citando a Luis Calvo, ha referido que la constitucionalización de los colegios profesionales se justifica en *"incorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional. Pues, en último extremo, las actuaciones profesionales afectan directamente a los propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, comprometiendo valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad física, la seguridad, la libertad, el honor (...) que los ciudadanos confían a los profesionales. Semejante entrega demanda (sic) por la sociedad el aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional, de acuerdo con sus patrones éticos, como correcto o adecuado"*¹⁷.
27. Por otra parte, mediante Ley 24648, Ley del CIP (en adelante, Ley 24648) publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de enero de 1987, se creó dicha entidad como una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería, de modo que resulta obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el Perú, tal como se detalla seguidamente:

LEY 24648, LEY DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

*Artículo 1.- El Colegio de Ingenieros del Perú es una **institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno** representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar, a nombre de la Nación, el título de ingeniero.*

*El (sic) **obligatoria la colegiación** para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país.*

(El énfasis es agregado)

28. Asimismo, el artículo 1 de la Ley 28858, Ley que complementa la Ley 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al CIP para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República, dispone también que, a fin de ejercer las labores propias de la Ingeniería, se requiere poseer grado académico y título profesional, estar colegiado y habilitado, conforme se aprecia a continuación:

17

Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 20 de enero de 2006. Cita de CALVO SÁNCHEZ, Luis. Régimen Jurídico de los colegios profesionales. Madrid, Civitas, 1998 p. 679.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

LEY 28858, LEY QUE COMPLEMENTA LA LEY 16053, LEY QUE AUTORIZA A LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL PERÚ Y AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ PARA SUPERVISAR A LOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA

Artículo 1.- Requisitos para el ejercicio profesional

*Todo profesional que ejerza labores propias de Ingeniería y de docencia de la Ingeniería, de acuerdo a la Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, N° 16053, requiere poseer grado académico y título profesional otorgado por una universidad nacional o extranjera debidamente revalidado en el país, **estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.***

(El énfasis es agregado)

29. En lo que corresponde a las reglas que rigen la colegiación de los profesionales en ingeniería, el artículo 6 de la Ley 24648¹⁸ dispone que el Estatuto constituye la norma que contempla tal aspecto, así como la estructura orgánica del CIP, el empleo de sus rentas y otros. Por tanto, en virtud de la autonomía constitucional a la que ya se ha hecho referencia, es el propio CIP el que regula el procedimiento para obtener la incorporación de miembros a su orden, así como los requisitos y condiciones necesarios para tales fines.
30. Sin perjuicio de lo anterior, debido a la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional de la ingeniería en el país como mecanismo para habilitar a los ingenieros conforme a las normas peruanas aplicables, el CIP, en tanto entidad de la Administración Pública que ejerce función administrativa, deberá respetar las disposiciones que rigen a estas¹⁹, en estricta observancia del

18

LEY 24648, LEY DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Artículo 6.- Un estatuto aprobado por Decreto Supremo determinará de conformidad con la presente ley, todo lo concerniente a la conformación, atribuciones y funciones de los diversos órganos del Colegio, el empleo y la distribución de sus rentas, las normas de la colegiación y el ejercicio de la profesión de los ingenieros nacionales y extranjeros, las normas sobre defensa y ética profesional, y todos los otros aspectos que sean convenientes para su mejor funcionamiento.

El estatuto preverá las normas para que los Consejos Departamentales dispongan autónomamente de los bienes ubicados en su ámbito territorial.

(El subrayado es agregado.)

19

DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" o "entidades" de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
 2. El Poder Legislativo;
 3. El Poder Judicial;
 4. Los Gobiernos Regionales;
 5. Los Gobiernos Locales;
 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
 7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.
- Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

principio de legalidad y, en consecuencia, de las normas del ordenamiento jurídico vigente, especialmente de las reglas contenidas en el TUO de la Ley 27444.

III.3.3 Análisis de las medidas cuestionadas

A. Exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros sean presentados por 3 (tres) miembros ordinarios para obtener la colegiatura temporal

31. Por Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, la Comisión determinó que la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018)²⁰, constituye una barrera burocrática legal, en tanto que el CIP tiene facultades para regular todo lo concerniente a las normas para la colegiación de los profesionales de ingeniería.
32. Al respecto, la Sala coincide con el pronunciamiento de la primera instancia, por cuanto el artículo 6 de la Ley 24648, antes citado²¹, le otorga al CIP plenas facultades para emitir las normas que regulan el procedimiento de colegiación, incluyendo los reglamentos correspondientes.
33. Asimismo, si bien el denunciante indicó que la medida cuestionada contraviene lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación²², no se aprecia una vulneración a tales disposiciones, en tanto que constituyen requisitos y condiciones que debe cumplir el aspirante a obtener la

Respecto de la naturaleza de los colegios profesionales y el ejercicio de la función administrativa, revisar los fundamentos desarrollados en la Resolución 0116-2018/SEL-INDECOPI del 2 de mayo de 2018.

20

REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Artículo 34. Para inscribirse en el Registro de Ejercicio Temporal, el postulante deberá satisfacer los siguientes requisitos:

a) Llenar y suscribir la hoja de inscripción y ser presentado por tres (03) miembros ordinarios habilitados del Colegio, con más de diez (10) años de antigüedad. Por lo menos uno de ellos debe ser de la especialidad de Ingeniería del postulante.
(...)

21

Ver nota al pie 18.

22

REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Artículo 34. Para inscribirse en el Registro de Ejercicio Temporal, el postulante deberá satisfacer los siguientes requisitos:

(...)

b) Acreditar la condición de Ingeniero graduado en una Universidad o Institución de otro país reconocida por las autoridades competentes del país de procedencia, cuyos planes de estudio y documentación correspondiente serán evaluados por el CIP.

c) Demostrar que en su país de origen está legalmente habilitado para ejercer la profesión de ingeniero, con una formación o título equivalente al de un ingeniero peruano de la especialidad que desea ejercer en el Perú.

d) Constancia expedida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria o la entidad que cumpla dicha función, reconociendo su título profesional en Ingeniería.
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

colegiatura, las cuales han sido establecidas por el CIP en el marco de su competencia.

34. Por tanto, de acuerdo con la metodología de análisis prevista en el Decreto Legislativo 1256, corresponderá evaluar en el siguiente acápite si el denunciante formuló argumentos respecto a la carencia de razonabilidad de la exigencia denunciada²³.

B. Restricción de obtener la colegiatura ordinaria para los profesionales en ingeniería extranjeros

35. La Comisión declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos, o cuyo título haya sido revalidado por una universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).
36. En apelación, el CIP manifestó que la Comisión no consideró que la Sala ya se había pronunciado en un procedimiento anterior (Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI) declarando que el Estatuto y el Reglamento de Incorporación no contienen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, siendo que la primera instancia no ha justificado su apartamiento del referido criterio.
37. Sobre el particular, tal como señala la entidad denunciada, este Colegiado emitió la Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI del 2 de mayo de 2018, respecto a un procedimiento iniciado de oficio sobre un posible tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura ordinaria, establecido en los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del CIP 2011, así como en los artículos 20 y 28 del Reglamento de Colegiación 2011.
38. En dicho procedimiento, la Sala concluyó que **no se apreciaba que las mencionadas disposiciones establecieran un tratamiento discriminatorio**

23

DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Artículo 15.- Condiciones para realizar el análisis de razonabilidad

La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve la admisión a trámite de esta. En los procedimientos iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho análisis en caso de que, a través de la resolución de inicio, se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida.

(El subrayado es agregado.)

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****INDECOPI****TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas**RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI****EXPEDIENTE 000294-2018/CEB**

ni alguna restricción para que los ingenieros extranjeros accedan a la colegiatura ordinaria.

39. No obstante, en la Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI fueron analizados los artículos 3.02 y 3.03 del Estatuto del CIP 2011, norma que no solo es distinta a la cuestionada por el denunciante en este caso, sino que contenía una regulación sustancialmente diferente a la que debe ser evaluada en este pronunciamiento, como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADROS 1 Y 2**DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO BAJO EL EXPEDIENTE 000185-2015/CEB (YA RESUELTO POR LA SALA) Y EL PRESENTE PROCEDIMIENTO**

Número de Expediente	Expediente 000185-2015/CEB	Expediente 000294-2018/CEB
Tipo de procedimiento	Procedimiento iniciado de oficio	Procedimiento iniciado de parte
Barrera burocrática cuestionada	Tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos obtengan la colegiatura ordinaria.	Tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos, o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria.
Materialización de la barrera burocrática	Numerales 3.02 y 3.03 del Estatuto del CIP 2011 Artículos 20 y 28 del Reglamento de Colegiación 2011	Literal a) del numeral 3.03 del Estatuto del CIP 2018 Artículo 16 del Reglamento de Colegiación 2018

DISPOSICIONES CUESTIONADAS

Expediente 000185-2015/CEB	Expediente 000294-2018/CEB
ESTATUTO DEL CIP 2011	ESTATUTO DEL CIP 2018
<p>3.02.- Para ejercer la profesión de Ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario, Vitalicio o Temporal del CIP y encontrarse habilitado. Los Miembros Ordinarios son los ingenieros con título profesional que han sido incorporados al CIP luego de haber sustentado lo requisitos para su colegiación, según lo señalado en el Artículo 3.09 del Estatuto.</p> <p>3.03.- Son Miembros Temporales los ingenieros extranjeros a quienes se reconoce</p>	<p>Art. 3.03.- Clases de Miembros: Ingenieros Ordinarios; Ingenieros Vitalicios; Ingenieros Temporales; y Miembros Honorarios. a. Ingenieros Ordinarios son aquellos incorporados al CIP, que cuentan con Título Profesional expedido por Universidad Peruana, que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria. Su registro es único y permanente.</p>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOP

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

el ejercicio temporal de la profesión en el Perú, con las obligaciones y derechos que fija el Reglamento.

Asimismo, son Ingenieros Ordinarios los peruanos que han concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley.

También podrán incorporarse como Ingenieros Ordinarios los profesionales en ingeniería registrados en Colegios Profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.

(...)

REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN 2018

Artículo 16. El ingeniero postulante debe acompañar a su solicitud los documentos pertinentes que demuestren:

a. Cumplir con alguna de las exigencias del inciso a) del Artículo 3.03 del Estatuto del CIP y lo indicado en el Reglamento de Colegiación, es decir:

- Contar con Título Profesional expedido por Universidad Peruana que acrediten cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria; o también
- Ser ciudadano peruano y haber concluido estudios de Ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley; o también
- Acreditar ser profesional en Ingeniería registrado en Colegio Profesional del extranjero con el cual el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.

(...)

40. Como se aprecia en la información antes reproducida, a diferencia de las disposiciones que fueron analizadas en el procedimiento seguido bajo el Expediente 000185-2015/CEB; en el Estatuto del CIP 2018 y en el Reglamento de Colegiación 2018 -los cuales serán analizados en este pronunciamiento- se contemplan reglas para el acceso a la colegiatura ordinaria que son **exclusivas para los profesionales en ingeniería peruanos**.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

41. Por tanto, a juicio de este Colegiado, no existe un apartamento de la Comisión del criterio expuesto en la Resolución 0117-2018/SEL-INDECOPI, puesto que en el referido acto administrativo se analizó una controversia distinta a la que nos ocupa en el presente caso.
42. De otro lado, el CIP alegó que la primera instancia no ha verificado la existencia de una barrera burocrática que restrinja la colegiatura ordinaria a los profesionales en ingeniería extranjeros, además de que no se ha considerado que el literal a) del numeral 3.03 del Estatuto del CIP, referido a los ingenieros ordinarios, permite la incorporación de aquellos profesionales registrados en los colegios profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.
43. Al respecto, de acuerdo con lo señalado por el denunciante, el literal a) del numeral 3.03 del Estatuto del CIP 2018 y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación 2018 contienen una restricción que resulta ilegal por establecer un tratamiento diferenciado entre los profesionales en ingeniería peruanos y los profesionales en ingeniería extranjeros, por lo que corresponde evaluar ambas disposiciones, las cuales se reproduce a continuación:

ESTATUTO DEL CIP 2018

Art. 3.03.- Clases de Miembros:

*Ingenieros Ordinarios;
Ingenieros Vitalicios;
Ingenieros Temporales; y
Miembros Honorarios.*

a. Ingenieros Ordinarios son aquellos incorporados al CIP, que cuentan con Título Profesional expedido por Universidad Peruana, que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria. Su registro es único y permanente.

Asimismo, son Ingenieros Ordinarios los peruanos que han concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley.

*También podrán incorporarse como Ingenieros Ordinarios los profesionales en ingeniería registrados en Colegios Profesionales del extranjero con los cuales el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.
(...)*

REGLAMENTO DE COLEGIACIÓN 2018

Artículo 16. *El ingeniero postulante debe acompañar a su solicitud los documentos pertinentes que demuestren:*

a. Cumplir con alguna de las exigencias del inciso a) del Artículo 3.03 del Estatuto del CIP y lo indicado en el Reglamento de Colegiación, es decir:

- *Contar con Título Profesional expedido por Universidad Peruana que acrediten cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria; o también*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

- Ser ciudadano peruano y haber concluido estudios de Ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley; o también
 - Acreditar ser profesional en Ingeniería registrado en Colegio Profesional del extranjero con el cual el CIP tiene convenios específicos de mutuo reconocimiento.
- (Énfasis y subrayado añadido)

44. Según indican las normas citadas, si bien en principio se establecen tres (3) vías para la obtención de la colegiatura ordinaria, la nacionalidad de la persona aspirante constituye un factor relevante, dado que los profesionales extranjeros solamente podrán disponer de dos (2) vías, como se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO 3

Nacionalidad del aspirante	Peruana	Extranjera
Supuestos en los que se permite el acceso a la colegiatura ordinaria	Si cuenta con <u>Título Profesional expedido por Universidad Peruana</u> , que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria.	Si cuenta con <u>Título Profesional expedido por Universidad Peruana</u> , que acreditan cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos, de acuerdo a la Ley Universitaria.
	Si ha concluido estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuenten con cinco años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título ha sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley.	
	Si el profesional aspirante en ingeniería está registrado en algún <u>colegio profesional del extranjero</u> con los cuales el CIP tenga convenios específicos de mutuo reconocimiento.	Si el profesional aspirante en ingeniería está registrado en algún <u>colegio profesional del extranjero</u> con los cuales el CIP tenga convenios específicos de mutuo reconocimiento.

45. Con sustento en dicha información, la Sala aprecia que el CIP ha establecido una **restricción** para la obtención de la colegiatura ordinaria que **no obedece a una circunstancia objetiva**, sino que responde únicamente a la nacionalidad del aspirante. Así, un profesional en ingeniería extranjero que cuente con estudios concluidos en el exterior o que posee un título revalidado²⁴ por una

24

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 009-2015-SUNEDU-CD, REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

Artículo 4.- Glosario

Para fines de la aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

(...)

4.9 **Revalidación u Homologación.**- Es el procedimiento mediante el cual las universidades peruanas autorizadas por Sunedu otorgan validez a los estudios realizados en el extranjero. El grado académico o título profesional obtenido en el extranjero es revalidado u homologado con el plan de estudios de una universidad peruana. El grado académico o título profesional a ser revalidado es emitido por una institución oficial de educación superior del país de origen.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

universidad peruana, se verá impedido de obtener la colegiatura ordinaria, contrariamente a lo que ocurre con los profesionales peruanos que se encuentren en las mismas condiciones, quienes sí podrían colegiarse.

46. Por tanto, la Sala coincide con lo expresado por la Comisión en el sentido de que la restricción impuesta por el CIP constituye una medida discriminatoria y, en consecuencia, ilegal, en tanto vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, así como los principios de uniformidad e imparcialidad previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 66 de esta última norma.
47. De otro lado, el CIP indicó en su recurso administrativo que, en los numerales 95, 96 y 97 de la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, la Comisión habría llegado a la conclusión de que no existe barrera burocrática ilegal en el tratamiento entre profesionales en ingeniería peruanos y extranjeros.
48. Sin embargo, en la parte mencionada por el CIP, la Comisión evaluó las normas que regulan el procedimiento de colegiación **temporal** y concluyó que no existía una vulneración a alguna norma del ordenamiento jurídico, como se aprecia seguidamente:

RESOLUCIÓN 0120-2019/CEB-INDECOPI DEL 5 DE MARZO DE 2019

"93. En consecuencia, el procedimiento de solicitud de colegiatura temporal mantendrá sus efectos para aquellos ingenieros extranjeros a quienes la Sunedu haya «reconocido» su título profesional de ingeniería y que opten por solicitarla.

94. En ese contexto, es preciso señalar que, de la revisión del Estatuto CIP y el Reglamento de Colegiación del CIP, esta Comisión advierte que la calidad de «ingeniero extranjero» le es aplicable a toda persona, a quien la Sunedu ha «reconocido» su título profesional de ingeniería emitido por una universidad extranjera, indistintamente de su nacionalidad (...)

95. En efecto, las normas citadas en el párrafo anterior disponen que la condición de «ingeniero temporal» es otorgada a todo aquel que tenga un título profesional de ingeniería emitido por una universidad extranjera que haya sido reconocido por la Sunedu, sin hacer algún tipo de distinción respecto a la nacionalidad de la persona que posea el diploma.

96. De ese modo, la situación de «ingeniero extranjero» también podrá recaer sobre un profesional de ingeniería de nacionalidad peruana, cuyo título emitido por una universidad extranjera, haya sido reconocido por la Sunedu; en consecuencia, le serán aplicables las normas pertinentes sobre la colegiatura temporal, dispuestas en el Estatuto y el Reglamento de Colegiación del CIP.

97. En consecuencia, esta Comisión verifica que las medidas señaladas en los puntos (ii) y (iii) de la Cuestión Controvertida de la presente resolución no contravienen lo dispuesto

en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 757, toda vez que, conforme ha sido desarrollado precedentemente, no se advierte un trato discriminatorio con su imposición; así como, se verifica que no vulneran alguna otra norma legal; por lo que, superan el análisis de legalidad."

49. Por tanto, la conclusión a la que alude el CIP no resulta relevante para el análisis efectuado en este punto, donde es objeto de estudio la colegiatura ordinaria de

19/29



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPÍ

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

dicho colegio profesional y no la temporal, por lo que debe desestimarse el argumento de la entidad denunciada.

50. Dado que se ha determinado que la medida cuestionada resulta ilegal, no corresponde evaluar la carencia de razonabilidad de la medida, de acuerdo con lo señalado en el numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo 1256²⁵.
51. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPÍ, que declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos, o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

III.4. Verificación de indicios de carencia de razonabilidad

52. Una vez superado el análisis de legalidad, la metodología de análisis establecida en el Decreto Legislativo 1256²⁶ determina que los órganos resolutivos en materia de eliminación de barreras burocráticas deben verificar si el denunciante cumplió con presentar indicios suficientes sobre la carencia de razonabilidad de la medida en cuestión²⁷.
53. Así, en esta parte del análisis del presente caso, se evaluará si, **hasta antes de la admisión a trámite de la denuncia**, se expusieron argumentos que estén referidos a la carencia de razonabilidad de la exigencia de que los profesionales

 25 Ver nota al pie 11.

26 Ver nota al pie 23.

27 **DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS**
Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad
16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos:
a. Medida arbitraria: es una medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o
b. Medida desproporcionada: es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.
16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos:
a. Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada.
b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública.
c. Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria y/o desproporcionada.
d. Alegar como único argumento que la medida genera costos.

Artículo 17.- Posibilidad de cuestionar los indicios sobre carencia de razonabilidad
Durante el procedimiento, la entidad puede presentar información y/o documentación que desacredite los indicios de carencia de razonabilidad de la medida.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal.

54. El denunciante indicó que la medida antes mencionada sería carente de razonabilidad por los siguientes motivos:

- (i) Contraviene lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo 34 del Reglamento del CIP, toda vez que estos últimos ya acreditan la capacidad profesional del solicitante.
- (ii) Impide de facto el ejercicio de la profesión al solicitante que no conozca o encuentre a los profesionales con los criterios exigidos, pese a contar con un permiso de trabajo en el Perú.
- (iii) El CIP no ha justificado la medida ya que, mediante el procedimiento de reconocimiento por parte de la Sunedu del título profesional expedido en el extranjero, queda acreditada la capacidad del ingeniero para el ejercicio de la profesión. No obstante, la imposición de la medida lo obliga a depender de terceras personas para poder obtener una colegiatura temporal.

55. Al respecto, la Sala considera que los argumentos mencionados en los puntos (i) y (ii) del numeral anterior no califican como indicios suficientes toda vez que se refieren a contradicciones en la normativa del CIP (lo cual ya fue evaluado en el análisis de legalidad) y a que no brindan mayor explicación sobre por qué la medida sería arbitraria o desproporcionada.

56. Sin embargo, el argumento mencionado en el punto (iii) plantea la arbitrariedad de la restricción denunciada dado que, como afirma el denunciante, esta carecería de justificación considerando que, a través del procedimiento de reconocimiento de títulos²⁸, el diploma del grado o título obtenido por el aspirante a obtener la colegiatura temporal adquiere valor oficial a través de una Resolución de la Sunedu.

28

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 009-2015-SUNEDU-CD, REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS

Artículo 4.- Glosario

Para fines de la aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

(...)

4.7 Reconocimiento. - Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la Sunedu, otorga validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación superior del extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del respectivo país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme consta en el diploma. Procede en aplicación de los Tratados suscritos y ratificados por el Perú y sus contrapartes, que prevean compromiso de reconocimiento en materia de educación universitaria.

(...)

(Numeral modificado por Resolución 099-2017-SUNEDU-CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de diciembre de 2017.)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

57. En tal sentido, el indicio aportado por el denunciante apuntaría a desvirtuar la existencia de un interés público en la medida cuestionada, dado que, al contar con un título reconocido por la Sunedu, quedaría acreditada la suficiencia técnica del profesional en ingeniería, de modo que no sería necesario recurrir a terceros que lo avalen.
58. En esa misma línea, el denunciante hace referencia a la presunta arbitrariedad de la medida, ya que su incorporación dependerá finalmente de la voluntad de terceras personas que lo presenten, siendo que estas deben ser tres (3) miembros ordinarios habilitados del CIP que, además, deben tener más de diez (10) años de antigüedad.
59. Por tanto, la Sala considera que corresponde evaluar la razonabilidad de la exigencia materia de denuncia.

III.5. Análisis de razonabilidad

60. En el análisis de razonabilidad previsto en el Decreto Legislativo 1256, corresponde que la Comisión y la Sala verifiquen que **la entidad denunciada haya acreditado** los siguientes aspectos:

(i) Que la medida no es **arbitraria**, es decir:

- La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad.
- La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada.
- Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida.

(ii) Que la medida es **proporcional** a sus fines, lo que implica:

- Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.
- Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.
- Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación.

61. En su recurso de apelación, el CIP indicó lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

- (i) La Comisión no ha considerado que la medida ya se encontraba prevista en un reglamento anterior, el cual fue evaluado en la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI y no se formuló ninguna observación al respecto.
 - (ii) La medida tiene sustento en el hecho de que, anteriormente, las resoluciones emitidas por la entonces Asociación Nacional de Rectores (ANR) no representaban ninguna garantía y los contratos de trabajo que se presentaban eran casi un negocio para las empresas.
 - (iii) Las empresas que piden la colegiación de sus profesionales extranjeros suelen enviar cartas firmadas por los propios ingenieros peruanos que laboran en ella y por las cuales presentan a los profesionales extranjeros que solicitan la colegiatura temporal.
 - (iv) Es un hecho de conocimiento general la abundancia de documentos que son falsificados, por lo cual se pide que la presentación esté a cargo de profesionales peruanos, quienes garantizan al aspirante.
62. En lo que corresponde a estos argumentos, la Sala considera que ninguno de ellos está orientado a demostrar que la entidad denunciada haya contemplado algún interés público que se busque tutelar a través de la exigencia cuestionada o que realizó una evaluación del impacto de la medida en los agentes económicos obligados a cumplirla.
63. Sin perjuicio de ello, este Colegiado estima pertinente establecer algunas consideraciones sobre la medida en cuestión.

III.5.1 Sobre la arbitrariedad de la medida

64. El CIP señala que la exigencia de que el profesional extranjero que aspira a obtener una colegiatura temporal sea presentado por tres (3) profesionales colegiados ordinarios con más de diez (10) años de antigüedad tiene como sustento que, anteriormente, las resoluciones emitidas por la Asociación Nacional de Rectores no brindaban algún tipo de garantía, además de que la falsificación de documentos resulta un hecho notorio.
65. En torno a dicho argumento, este no demuestra que sea necesario que el profesional en ingeniería extranjero cuente con una recomendación o aval de los miembros colegiados ordinarios del CIP, considerando que la suficiencia técnica del aspirante queda demostrada con la obtención del grado o título reconocido por la Sunedu²⁹.
66. Asimismo, a criterio de la Sala, la exigencia en cuestión tendría sustento en la incertidumbre respecto al comportamiento previo del aspirante a obtener la

29

Ver nota al pie 28.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****INDECOPI****TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas***RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI****EXPEDIENTE 000294-2018/CEB**

colegiatura temporal, razón por la que resultaría necesario que cuente con la "garantía ética" de miembros ordinarios que posean cierto tiempo de antigüedad (con más de diez 10 años).

67. Sin embargo, debe considerarse que, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto del CIP³⁰, una de las funciones de dicha entidad es precisamente la de cautelar el ejercicio ético de la ingeniería, para lo cual, ante la ocurrencia de un incumplimiento a las normas y obligaciones establecidas por la mencionada Orden, podrá disponer las medidas disciplinarias correspondientes, no siendo necesario que el aspirante cuente con una suerte de "aval" ético representado por la declaración de los miembros que lo presentan.
68. En tal sentido, no se aprecia que la medida en cuestión resulte necesaria para tutelar un interés público ni para solucionar algún problema o alcanzar un objetivo que involucre fines públicos, por lo que debe desestimarse los argumentos de la entidad denunciada.

III.5.2 Sobre la proporcionalidad de la medida

69. El CIP indicó que la Comisión no había valorado que la medida ya se encontraba prevista en un reglamento anterior, el cual fue evaluado en la Resolución 489-2015/CEB-INDECOPI y no se formuló ninguna observación al respecto.
70. No obstante, el hecho de que la medida haya sido considerada en un reglamento anterior poco tiene que ver con que la entidad haya evaluado su impacto en términos de costos y beneficios o con el descarte de medidas menos gravosas.
71. En tal sentido, se observa que el CIP ha omitido determinar que los beneficios producidos por la medida superan los costos, a pesar de que la exigencia en

30

ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Art. 2.02.- El Colegio de Ingenieros del Perú propicia y promueve la existencia y disponibilidad de una ingeniería nacional ética y técnicamente competente.

Art. 2.14.- Fines

(...)

III. CON RELACIÓN A LOS INGENIEROS:

(...)

e. Cautelar que el ejercicio de la ingeniería se realice conforme a la Ética Profesional y sus normas;

(...)

Art. 4.93.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Estatuto, el Código de Ética, los Reglamentos y los Acuerdos adoptados por el CIP constituyen infracciones sujetas a sanciones disciplinarias, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art. 4.94.- El Colegio de Ingenieros del Perú, a través de los Tribunales Deontológicos, debe aplicar a los ingenieros, según la magnitud de la falta cometida y de acuerdo al reglamento, las siguientes sanciones: a. Amonestación escrita; b. Suspensión temporal por Falta Leve, desde tres meses hasta un año; c. Suspensión temporal por Falta Grave, más de un año hasta tres años; d. Separación definitiva por Falta Muy Grave; e. Sanción económica, que procede en los casos resueltos por el Tribunal Ad-Hoc Profesional. El Código de Ética tipificará las conductas sancionables, estableciendo los criterios de las sanciones.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****INDECOPI****TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas***RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI****EXPEDIENTE 000294-2018/CEB**

cuestión supone que los profesionales extranjeros no obtener la colegiatura temporal -y, en consecuencia, no podrán ejercer la ingeniería en el Perú- a menos de que cuenten con la declaración de miembros colegiados ordinarios del CIP, quienes no necesariamente pueden dar fe de la suficiencia técnica o ética del aspirante.

72. Así, la Sala considera que la medida denunciada tendría consecuencias negativas, en tanto que crea incentivos para que los profesionales en ingeniería extranjeros busquen obtener este tipo de recomendaciones a cualquier costo, el cual siempre resultará menor frente a la imposibilidad de ejercer la profesión en el país.
73. Por tanto, se generaría un escenario en el cual los miembros colegiados ordinarios del CIP que posean la antigüedad necesaria presenten a los profesionales extranjeros ante dicha orden a cambio de algún beneficio, es decir, se podría crear un “mercado de recomendaciones” alejado totalmente de una de las finalidades de la colegiatura: asegurar el correcto ejercicio de la profesión³¹.
74. En virtud de lo expuesto, dado que el CIP no ha acreditado la ausencia de arbitrariedad ni la proporcionalidad de la exigencia denunciada, la Sala verifica que carece de razonabilidad.
75. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú, con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

III.6. Sobre la inaplicación con efectos generales de la barrera declarada ilegal

76. En la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, la Comisión dispuso la inaplicación con efectos generales del tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del CIP y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

31

Ver numeral 26 del presente pronunciamiento.

25/29



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

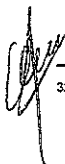
RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

77. Sobre el particular, el artículo 8 del Decreto Legislativo 1256³², establece que la Comisión o la Sala, de ser el caso, dispondrán la inaplicación de una disposición administrativa con efectos generales cuando se declare la ilegalidad de una barrera burocrática.
78. En atención a ello, al haberse confirmado la ilegalidad de la exigencia antes señalada, corresponde también confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en el extremo que ordenó su inaplicación con efectos generales.
79. Asimismo, corresponde confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI en el extremo que ordenó publicar un extracto de la resolución en el diario oficial "El Peruano", acorde con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1256³³, así como el texto completo en el portal sobre eliminación de barreras burocráticas al que se hace referencia en el artículo 51 del citado decreto³⁴.

III.7 Sobre los demás extremos de la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI

80. En la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI, la Comisión determinó lo siguiente:
- (i) Disponer la inaplicación de la medida declarada barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad en favor del denunciante.
 - (ii) Ordenar como medida correctiva que el CIP informe a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal y carente de razonabilidad en el presente procedimiento.
 - (iii) Disponer que el CIP informe las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la primera instancia.

 ³² **DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS**
Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas
8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.
(..)
8.3. La inaplicación con efectos generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución emitida por la Comisión o la Sala, de ser el caso, en el diario oficial "El Peruano".

³³ **DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS**
Artículo 12.- Sobre la publicación de las resoluciones
El Indecopi, a través de resolución de su Consejo Directivo, aprueba las disposiciones necesarias para la publicación del extracto de las resoluciones indicadas en el artículo 8 y 9, en el diario oficial "El Peruano" y el texto completo de las mismas en el portal al que se refiere el artículo 51 de la presente ley. La publicación de estas resoluciones en el diario oficial "El Peruano" se efectúa de manera gratuita.

³⁴ **DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS**
Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras burocráticas
Créase el portal informativo que promueve la eliminación de barrera burocráticas, el cual es administrado por el Indecopi, teniendo como principal objetivo incluir el registro de resoluciones de la Comisión y de la Sala que declaran barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

(iv) Ordenar al CIP que cumpla con pagar al denunciante las costas del procedimiento.

81. Al respecto, considerando que se ha confirmado la ilegalidad y carencia de razonabilidad de medidas impuestas por el CIP, además de que los referidos extremos únicamente fueron cuestionados bajo el argumento de que la denuncia era infundada, corresponde confirmarlos también.
82. Por otra parte, en vista de que se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, carece de objeto evaluar la medida cautelar solicitada por el denunciante.

III.8 Sobre el traslado de los medios probatorios aportados por el denunciante

83. En su escrito del 13 de septiembre de 2019, el CIP cuestionó que no se le haya corrido traslado del disco compacto (CD) que acompañaba el escrito del denunciante del 12 de agosto de 2019.
84. Al respecto, cabe señalar que, según indicó el denunciante en el referido documento, el CD contendría conversaciones sostenidas con una representante del CIP en el módulo de colegiación ubicado en el distrito de San Isidro que fueron reproducidas por el administrado en el escrito mencionado en el numeral anterior, información de la cual tomó conocimiento la entidad denunciada³⁵.
85. Sin embargo, dado que en el presente procedimiento el objeto de controversia está constituido por medidas contempladas en disposiciones emitidas por el CIP, las cuales son de alcance general, de modo que no resultan relevantes las circunstancias particulares o afectaciones que pudiera haber sufrido el denunciante.
86. En ese orden de ideas, considerando que este Colegiado no ha tomado en cuenta el medio probatorio señalado por el CIP, no se aprecia una afectación al derecho de defensa de dicha entidad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

PRIMERO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan

³⁵ El escrito presentado por el denunciante el 12 de agosto de 2019 fue trasladado al CIP mediante Cédula de Notificación 2108-2019/SEL-INDECOPI, recibida por dicha entidad el 6 de septiembre de 2019.

**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****INDECOPI****TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas***RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI****EXPEDIENTE 000294-2018/CEB**

obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

SEGUNDO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que declaró carente de razonabilidad la exigencia de que los profesionales en ingeniería extranjeros deban ser presentados por tres (3) miembros ordinarios habilitados del Colegio de Ingenieros del Perú con más de diez (10) años de antigüedad para obtener la colegiatura temporal, materializada en el literal a) del artículo 34 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

TERCERO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que dispuso la inaplicación de las medidas declaradas ilegales y carentes de razonabilidad en el presente procedimiento a favor del señor Borja López Lasala.

CUARTO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que ordenó la inaplicación, con efectos generales, del tratamiento diferenciado entre profesionales en ingeniería peruanos y profesionales en ingeniería extranjeros, consistente en la restricción para que estos últimos, habiendo concluido sus estudios de ingeniería en universidades extranjeras, internacionalmente acreditadas, que cuentan con cinco (5) años de estudios o diez (10) semestres académicos o cuyo título haya sido revalidado por universidad peruana autorizada por Ley, puedan obtener una colegiatura ordinaria, materializado en el literal a) del artículo 3.03 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú y el artículo 16 del Reglamento de Colegiación (julio 2018).

QUINTO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que ordenó publicar en el diario oficial "El Peruano" un extracto de la presente resolución respecto del punto resolutivo anterior, así como su texto completo en el portal informativo sobre eliminación de barreras burocráticas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

SEXTO: confirmar los puntos resolutivos Octavo, Noveno y Décimo Sexto de la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019.

SÉPTIMO: declarar que carece de objeto evaluar la solicitud de medida cautelar formulada por el señor Borja López Lasala.

OCTAVO: confirmar la Resolución 0120-2019/CEB-INDECOPI del 5 de marzo de 2019, en el extremo que denegó el pedido de confidencialidad formulado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

NOVENO: requerir al Colegio de Ingenieros del Perú que, en un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

RESOLUCIÓN 0549-2019/SEL-INDECOPI

EXPEDIENTE 000294-2018/CEB

resolución, manifieste si desea que los documentos cuya confidencialidad se ha denegado le sean devueltos, siendo que, en caso no brinde respuesta en el plazo indicado, se dispondrá su incorporación al expediente público con el mismo tratamiento que cualquier otro documento.

Con la intervención de los señores vocales Ana Asunción Ampuero Miranda, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama, Gilmer Ricardo Paredes Castro, Víctor Sebastián Baca Oneto y Orlando Vignolo Cueva

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

